

# **La sanción del delito ambiental en el contexto del conflicto armado**

**Héctor Giovanni Cely Mariño**

**Oscar Gustavo Jaimes Villamizar**

**Carlos Humberto Moreno Rey**

**Universidad Libre**

**Facultad de Derecho y Ciencias Políticas**

**Instituto de Posgrados**

**Maestría en Derecho Penal**

**Bogotá, D.C.**

**2018**

**La sanción del delito ambiental en el contexto del conflicto armado**

**Héctor Giovanni Cely Mariño**

**Oscar Gustavo Jaimes Villamizar**

**Carlos Moreno**

**Director**

**Alfonso Daza González**

**Universidad Libre**

**Facultad de Derecho y Ciencias Políticas**

**Instituto de Posgrados**

**Maestría en Derecho Penal**

**Bogotá, D.C.**

**2018**

## **AUTORIDADES ACADÉMICAS**

Jorge Alarcón Niño

Presidente Nacional

Fernando Dejanón Rodríguez

Rector nacional

Jorge Gaviria Liévano

Vicepresidente nacional

Jesús Hernando Álvarez Mora

Rector Seccional

Fernando Arturo Salina Suárez

Decano

Ana Roció Niño Pérez

Secretaria Académica

John F. Martínez

Director Centro de Investigaciones

**NOTA DE ACEPTACIÓN**

---

---

---

---

---

Firma del presidente del jurado

---

Firma del jurado

---

Firma del jurado

## **Contenido**

	<b>pág.</b>
<b>Introducción</b>	<b>7</b>
<b>Metodología</b>	<b>10</b>
<b>Objetivos</b>	<b>10</b>
 <b>Capítulo 1.</b>	 <b>12</b>
<b>1. La sanción del delito ambiental en el contexto del conflicto armado</b>	<b>12</b>
1.1. El concepto de daño ambiental	12
<b>1.1.1.El daño ambiental desde una aproximación teórica</b>	<b>13</b>
<b>1.1.2.Las sanciones en materia de daños al ambiente</b>	<b>15</b>
1.2. El marco jurídico internacional y nacional sobre el daño ambiental de cara a la responsabilidad ambiental	17
1.2.1.Derecho Internacional Humanitario del medio ambiente	19
1.3. El delito ambiental	26
1.3.1.Jurisprudencia en materia ambiental	31
 <b>Capítulo 2.</b>	 <b>35</b>
<b>2. Dinámica del medio ambiente en el contexto del conflicto armado</b>	<b>35</b>
2.1. Introducción	35
2.2. Conflicto armado y medio ambiente	39

2.2.1.Desarrollo del término conflicto	39
2.2.2.Geografía de la afectación de los recursos naturales con ocasión del conflicto	47
2.3. Integridad territorial y conflicto armado	49
2.3.1.Los ecosistemas como actores indirectos del conflicto armado	49
2.3.2.Causas y consecuencias del deterioro ambiental con relación al conflicto armado	52
2.4. El acuerdo de paz y la protección al medio ambiente	54
 <b>Capítulo 3.</b>	 <b>59</b>
<b>3. Análisis del delito ambiental desde la perspectiva del conflicto armado</b>	<b>59</b>
3.1. Una aproximación al artículo 331 del Código Penal – daños en los recursos naturales	59
3.2. Análisis	62
 <b>Conclusiones</b>	 <b>67</b>
<b>Referencias</b>	<b>69</b>

## Introducción

El trabajo que a continuación se desarrolla es el resultado de la inquietud que tienen los autores frente a las diversas manifestaciones de debilidad que tiene el Estado colombiano, al imponer sanciones a quienes atentan contra el equilibrio ambiental, siendo uno de los derroteros más grandes el conflicto armado, que con sus acciones han dejado una cuota muy grande, en materia de destrucción del ambiente, con ocasión de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, sumándose los medios y métodos de guerra ilícitos que debilitan el ambiente, por su alto contenido de toxicidad.

El problema que se plantea en esta investigación se fundamenta desde el quehacer que el Derecho Penal debe tener frente a aquellos eventos que atentan contra la armonía del ambiente, expresado en los siguientes términos: *¿Cuál ha sido el alcance de la norma penal para sancionar el delito ambiental con ocasión de las acciones del conflicto armado?*

Al respecto se debe señalar que el problema ambiental que tiene el país ha logrado abarcar todos los ecosistemas, generando con ello, una situación de preocupación constante, pues el deterioro de los recursos naturales día a día es más grande, exigiendo soluciones prontas y efectivas en la materia. Así, una de las situaciones más preocupantes es la sanción del delito ambiental frente a las acciones ejercidas por el conflicto armado; toda vez, que pareciera existir una clara impunidad al momento de confrontar los daños ambientales motivados por la minería ilegal y los cultivos ilícitos, por citar solo dos ejemplos de los tantos existentes, los cuales dejan a su paso “deforestación, erosión, pérdida de fauna y flora, contaminación atmosférica – aire, entre otros” (Contraloría General de la República, 2012, pág. 36).

La pregunta surge por las diferentes situaciones que evidencian el deterioro del ambiente, el cual se ha convertido en una constante; generando una problemática que se puede decir es tan antigua como el conflicto mismo, la cual en primera instancia puede evidenciar dos situaciones:

- Que la norma penal modifique el artículo 164 del Código Penal, en donde, quede taxativa la presencia de las acciones terroristas a manos de los grupos armados, debido a que la expresión *el que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado...*, no es clara pues no hace referencia directamente a los miembros de los grupos armados. Adicionalmente, los artículos del 328 al 339 del Código Penal relacionados con los delitos ocasionados al medio ambiente, deben hacer mención de los ataques perpetrados por los grupos armados.

- Que se diseñe un capítulo aparte dentro del Código Penal que establezca la sanción del delito ambiental con ocasión del conflicto armado, integrando todas sus modalidades, con penas que sean equivalentes al daño que están generando los grupos armados.

Si bien, se debe primero reformular los artículos existentes en el Código Penal, esto permitirá disminuir los riesgos existentes como los mencionados; en cuyo caso, un marco normativo sólido, debe constituir la base primordial en pro de favorecer a la naturaleza y no quedarse a medias, en donde los avances, constituyen hechos individualizados por las diferentes entidades y los particulares a lo largo y ancho del territorio.

En segundo lugar, se puede dar una respuesta más directa, a través de la propuesta del diseño del capítulo, debido a que no va a dejar lugar a dudas, de la imposición de la sanción del delito ambiental, a quienes han generado un daño de grandes proporciones. De forma, sínica los grupos armados a las acciones perpetradas contra el ambiente las han llamado “métodos de guerra”, que no es otra cosa que ataques indiscriminados contra el ambiente.



Los métodos de guerra en los que los actores ilegales han incurrido van desde la voladura de oleoductos hasta la contaminación de acueductos, tala indiscriminada, la extracción de minerales, la alteración del cauce de los ríos, entre otras.

Estas acciones, sumadas a los cambios abruptos que impusieron en los usos de las tierras y los ríos, al igual que en las actividades agrícolas, han generado daños ambientales gravísimos y aún no calculados. Tierras erosionadas por el abandono o uso inadecuado, fuentes de agua contaminadas por efecto del derrame de hidrocarburos, especies de fauna y flora extinguidas o en riesgo de extinción y reservas naturales invadidas, son algunos de los impactos que la guerra ha causado en el medio ambiente (Macías, 2015, pág. 1).

En esta investigación se analizará por qué la normativa colombiana es laxa o no es tomada en cuenta, en debida forma, frente a un problema de tan grandes magnitudes. Así, como lo ha expresado la Corte Constitucional cuando ha expresado que la naturaleza es parte vital de la existencia y permanencia del ser humano sobre la tierra. De modo tal, “que los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad” (Corte Constitucional Sentencia T-092, 1993).

Razón por la cual, el medio ambiente debe ser protegido en todas sus formas, evento en el cual la sanción del delito ambiental en el Derecho Penal debe ser una prioridad.

## **Metodología**

El tipo de estudio elegido es el “explicativo, el cual va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están relacionadas” (Hernández, S, Fernández, C y Baptista, L, 2010, pág. 110).

La investigación explicativa refleja una situación de la realidad exponiendo su importancia dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que evidencian hechos o fenómenos que se producen en determinadas situaciones.

Así, este tipo de investigación busca dar respuesta a la pregunta de investigación y los objetivos propuestos en pro de analizar la sanción del delito ambiental en el contexto del conflicto armado.

Investigación que se acompañó de un método documental el cual permitió la consulta y análisis de diversos documentos que aporten al desarrollo del trabajo. Así, la doctrina y jurisprudencia constituyen el eje central de revisión.

## **Objetivos**

### *Objetivo general*

Analizar el alcance de la norma penal para sancionar el delito ambiental con ocasión de las acciones del conflicto armado.

### *Objetivos específicos*

- Abordar lo concerniente al delito ambiental y su desarrollo normativo y jurisprudencial
- Revisar la dinámica del medio ambiente en el contexto del conflicto armado
- Determinar el alcance de la sanción del delito ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal con relación a las acciones del conflicto armado.

Cada uno de los objetivos se desarrollan estudiando la doctrina, normativa y jurisprudencia en materia penal, partiendo del componente teórico – conceptual relacionado con el medio ambiente enfocado a la penalización de este frente a las infracciones cometidas por el conflicto armado.

## **Capítulo 1.**

### **1. La sanción del delito ambiental en el contexto del conflicto armado**

#### **1.1. El concepto de daño ambiental**

El concepto de ‘daño ambiental’ se ha ido transformado desde el punto de vista normativo, jurisprudencial y dogmático; aspecto que ha permitido avances significativos en la materia, superando la visión primigenia, incluyendo una visión integral que da cuenta de una serie de valores y principios fundamentales para identificar los efectos tanto ecológicos como sociales que están llamados a ser valorados como resultado de la generación del daño.

Desde esta óptica, se ha logrado replantear la noción que debe ser aparejada con la teoría de la justicia y la responsabilidad ambiental, con el fin de solucionar aquellas afectaciones relacionadas con la contaminación, el daño ambiental y los pasivos ambientales comprendiendo “que quien origina el daño ambiental mantiene una obligación que no solo recae en la identificación de una conducta, sino en la exigencia de una responsabilidad que exige restaurar *in natura* y compensar por los daños ambientales, ecológicos como sociales” (Dávila, 2016, pág. 27).

Definición que se complementa con la que establece que el “daño ambiental en estricto sentido, o puro, es aquel que se causa o bien al ambiente, o bien a cualquiera de sus elementos, como una realidad autónoma de los valores ortodoxos asociados a la salud y al patrimonio” (Rodríguez, G y Vargas, Ch, 2015, pág. 6). De ahí que su accionar es potestativo de la sociedad en general, la cual sufre de forma directa e inmediata los daños ambientales.

De modo tal, que “además de lo señalado el concepto del daño ambiental integra una estrecha relación con otros conceptos relevantes, como impacto, contaminación y pasivo ambiental

en perspectiva de una teoría de responsabilidad ambiental que supere aquellas patrimonialistas desarrolladas desde la concepción civilista” (Ávila, 2014, pág. 68), en pro de afianzar lo dispuesto por la justicia penal ambiental.

### **1.1.1. El daño ambiental desde una aproximación teórica**

En el presente apartado se aborda el daño desde una perspectiva teórica, que señala la superación de las posiciones que plantean la responsabilidad ambiental y civilista para afianzar los postulados en materia penal. Así, el daño ambiental está estrechamente relacionado con las acciones o conductas realizadas por las personas sin importar su condición, que llevan a generar la contaminación e impactos ambientales no deseados, que exige reconocer el grado de interacción estableciendo los principios de responsabilidad en el procedimiento sancionatorio ambiental, buscando “el reconocimiento del concepto de daño ambiental y responsabilidad ambiental, que, si bien integra elementos importantes en diferente dimensión, va más allá de los esquemas puros de responsabilidad civil”. (García, 2007, pág. 1).

De ahí que, el fin del derecho ambiental es avalar por medio de los mecanismos legales la protección de la naturaleza como un derecho o bien de carácter colectivo. Defensa que desde el punto de vista civilista resulta precaria. Se tiene entonces que, desde el punto de vista doctrinario, el daño ambiental se ha conocido como la “afectación, disminución o aminoración sobre el valor del bien o recurso natural y ambiental, desde lo cual se produce un desconocimiento de los derechos e intereses ambientales colectivos” (Rivera, 2017, pág. 95); en este sentido, el daño puede estar ocasionado tanto en actividades ilegales o antijurídicas como en actividades amparadas legalmente, “con lo cual también se incluyen los casos de abuso o desconocimiento de la

autorización por parte de la autoridad ambiental, como las concesiones, permisos o licencias ambientales otorgadas” (Corte Constitucional Sentencia T - 204, 2014).

Sobre este aspecto aún existen vacíos que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia esta tarde de solucionar, pese a los avances logrados en la materia sobre los daños ambientales autorizados legalmente, pero que son objeto de control, manejo ambiental y seguimiento por parte de las “autoridades ambientales a través de las autorizaciones en los actos administrativos, con lo cual el problema de daño ambiental se remitiría a los hechos en que los titulares de la autorización desconocen las medidas allí impuestas” (Corte Constitucional sentencia C - 703, 2010); a lo que se suma las acciones terroristas que debilitan la protección al medio ambiente conforme a la manera como se presentan, esquivando todo tipo de protección.

En consecuencia, se observa claramente que el tema del “daño ambiental se enmarca en las instancias de las autorizaciones ambientales como la licencia ambiental, pero también correlativamente desde las medidas de carácter sancionatorio” (Corte Constitucional Sentencia T - 204, 2014). Con lo expuesto, se observa el deber del Estado en cabeza de los órganos que lo integran en tomar las acciones orientadas a notificar o impedir la reproducción del daño de la naturaleza, y, de igual manera, avalar las estrategias para su resarcimiento y satisfacción total.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge un gran interrogante en relación con el daño ambiental sobre las limitantes de los conceptos y esquemas de la responsabilidad penal ambiental para afrontar el problema de los derechos e intereses colectivos involucrados, frente a un ataque terrorista.

### **1.1.2. Las sanciones en materia de daños al ambiente**

“Cuando se trata de imputar la responsabilidad penal a una persona natural, no hay discusión, pero el tema no es unánime en materia de responsabilidad de personas jurídicas, y más aún teniendo en cuenta el principio de *societas delinquere non potest*” (Ruíz, 2007, pág. 120).

En cuanto a la persona jurídica, funciona de forma diferente, debido a que las personas que la integran tienen derechos autónomos que distan de la persona jurídica. En cuyo caso, “la responsabilidad penal de las personas jurídicas con base en el principio de especialidad no puede aceptarse; por cuanto, esta nace solo para cumplir un fin social” (Ruíz, 2007, pág. 120). Fin social que debe tener una connotación lícita para que logré ser una persona jurídica logrando la participación en las estancias requeridas.

En materia de delitos contra el medio ambiente es necesario referenciar la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la naturaleza jurídica de las sanciones que se imponen, es decir, si se trata de una pena en sentido estricto o, por el contrario, de sanciones administrativas que deberían ser impuestas sólo por la jurisdicción administrativa.

Es por lo antes anotado que el argumento según el cual las sanciones contra las personas jurídicas no pueden ser castigadas con penas; aspecto que no es posible “porque para que exista una pena debe presuponerse una conducta humana y una culpabilidad” (Martínez, D, 2002, pág. 3). Para que se de las sanciones a las personas jurídicas, en términos de condenas tendrían que darse normas especiales de imputación.

Al respecto Hurtado (2008) citando a Shünemann (1979) ha señalado que teniendo en cuenta el estado de necesidad en el que se encuentran “los bienes jurídicos amerita la condena en contra de las personas jurídicas, y aunque la culpabilidad no se necesite para llegar a estas

consecuencias penales, surge un dilema ante la debilidad de la eficacia preventiva del derecho penal” (Hurtado, 2008, pág. 107).

Por razones garantistas deben de existir las medidas de seguridad que permitan la tutela de los bienes jurídicos en términos de necesidad y proporcionalidad. Así, desde otro punto de vista la responsabilidad de la persona jurídica “es consecuencia de un defecto de organización despersonalizada. Como los grandes riesgos empresariales no pueden ser controlados directamente por la Administración, ni ser amortiguados por penas individuales, son responsabilidad de la empresa que los crea y los debe controlar” (Ruíz, 2007, pág. 121).

Desde este punto de vista se debe tener en cuenta que una de las finalidades “del derecho penal, es que no puede desconocer la protección de los intereses colectivos como es el caso del medio ambiente que debe permanecer benéfico para el ser humano” (Díaz, 2015, pág. 172).

En este orden de ideas, en Colombia son cinco las consecuencias penales para las personas jurídicas, siendo alguna de estas tomadas como penas bajo el entendido que las mismas se han orientado a sancionar a personas naturales. Se habla entonces de la multa, suspensión y cancelación de la personería jurídica, el comiso, la extinción de dominio y la inhabilitación para el ejercicio de industria y comercio.

“La multa, porque está señalada en los delitos contra el medio ambiente como pena principal. La suspensión y cancelación de la personería jurídica, podrá ser con carácter definitivo según lo dispuesto en el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal” (Ruíz, 2007, pág. 122).

En cuanto, al comiso y la extinción de dominio las dos se ejecutan sobre los bienes y recursos de quien se encuentra penalmente responsable, haciendo énfasis que la segunda tiene un trámite particular.



Por último, la inhabilitación para el ejercicio del comercio e industria se encuentra consagrado en el artículo 43 del Código Penal. Así, en la norma colombiana no se ha logrado establecer si las consecuencias jurídicas que emergen del proceso penal se puedan aplicar a las personas jurídicas o solo se trata de sanciones administrativas.

## **1.2. El marco jurídico internacional y nacional sobre el daño ambiental de cara a la responsabilidad ambiental**

Para dar comienzo, debe considerarse que el daño al medio ambiente ha evolucionado normativamente a partir de las interpretaciones que identifican el desarrollo de las estrategias sobre la protección de éste, y que se originan con el Derecho Ambiental Internacional a partir de la Declaración de Estocolmo sobre Ambiente Humano (1972), la Declaración de Río de Janeiro (1992) y la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible (2002). Disposiciones que integran el derecho suave – soft law – o no vinculante, como la primera y la última declaración, y las disposiciones de derecho fuerte vinculante – hard law –, que, para Colombia se remiten a la Declaración de Río de Janeiro (1992) por medio del artículo 1º de la Ley 99 de 1993.

En este orden de ideas, se identifican las normas internacionales orientadas al daño ambiental, como es el caso de la Declaración de Estocolmo (1972) que:

(...) en el principio 22 establece que los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados

causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción, y en el principio 23 indica que toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización (...).

Posteriormente, en la Declaración de Río de Janeiro (1992) instituyó en el segundo principio la soberanía de los Estados sobre sus recursos, política ambiental y actividades, siempre que no perjudiquen a otras naciones, postulados que se generaron bajo la premisa de la *regla del no daño* o responder por los generados a los demás Estados. De igual manera, en el principio 10, se reconocieron las garantías por parte de los Estados, quienes a partir de ese momento debían conceder *orientación a los procesos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento*.

En el principio 13, se hace referencia a la obligación de los Estados para “*desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales*” (Organización de Naciones Unidas [ONU], 1992, pág. 4), así como promover nuevas leyes internacionales en materia de responsabilidad e indemnización como consecuencia de los daños ambientales ocasionados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción.

Consecutivamente, con la aprobación de la Constitución Política de 1991, se determinó como parte de las obligaciones a cargo del Estado, dentro del artículo 80 de la Constitución, la planificación sobre el “manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, pero adicionalmente, el deber de

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” (Constitución Política, 1991).

Igualmente, el artículo 88 de la Constitución señala que la ley *definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos*. Y de forma más reciente, la legislación colombiana en materia de responsabilidad frente al daño ambiental esgrimió la Ley 1333 de 2009 que establece el apartado normativo sobre el procedimiento sancionatorio ambiental, incluyendo la sanción cuando se ocasiona un daño ambiental bajo las mismas condiciones exigidas en materia de *responsabilidad civil extracontractual* – el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el nexo causal –.

Al respecto, en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 sobre el procedimiento sancionatorio ambiental se establece la discrepancia entre la sanción propiamente dicha y la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil, aclarándose además en el artículo 31 que frente a las medidas compensatorias la imposición de una sanción no niega la responsabilidad del infractor en el cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente considere oportunas instaurar para equilibrar y restituir el daño o el perjuicio ocasionado con la infracción.

Un aspecto adicional que puede encontrarse en la Ley 1333 de 2009 ha sido la aplicación del principio de prevención que se desarrolla a través de la posibilidad de dictar medidas preventivas (artículo 36) a fin de impedir la reproducción del peligro sobre el ambiente.

### **1.2.1. Derecho Internacional Humanitario del medio ambiente**

Hoy en día, en el derecho internacional humanitario (DIH) se encuentran tres aspectos en lo relacionado a la protección del medio ambiente en el marco del conflicto armado: El primero se

orientado a la definición de daño ambiental inaceptable es demasiado condicional y poco clara; en segundo lugar, existen “incertidumbres jurídicas en cuanto a la protección de elementos del medio ambiente como bienes de carácter civil; y en tercer término, la aplicación del principio de proporcionalidad, según el cual el daño al medio ambiente constituye “daño colateral”, también es problemático” (Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D, 2010, pág. 321)

Es importante señalar que en el marco de los conflictos armados se aplica el [DIMA], el cual “es un cuerpo establecido de normas, estándares, enfoques y mecanismos destinados a prevenir y reparar con inclusión de obligaciones y, cada vez más, responsabilidades los daños al medio ambiente en tiempos de paz” (Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D, 2010, pág. 332) debido a las deficiencias y lagunas por parte del DIH con relación a la protección del medio ambiente.

También es fundamental aclarar que en el derecho internacional humanitario existen lagunas y oportunidades referente a los daños directos e indirectos que ocasiona el conflicto armado al medio ambiente los cuales afectan la salud humana, la seguridad y los medios de vida; entre estas están:

- La definición restrictiva y poco clara del daño al medio ambiente que se prohíbe en las disposiciones que explícitamente mencionan la protección del medio ambiente en situaciones de conflicto armado;
- La protección insatisfactoria de los elementos del medio ambiente como objetos civiles debido a la sencilla transformación de dichos elementos en objetivos militares; y

- Las dudas acerca de la aplicación práctica del principio de proporcionalidad al daño ambiental, entendido como daño colateral originado por ataques contra objetivos militares (Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D, 2010, pág. 345)

Por lo cual existen acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente -AMMA-, durante el conflicto armado, asimismo la forma en que los “instrumentos del DIMA determinan su aplicabilidad durante situaciones de conflicto armado varía sustancialmente. Algunos AMMA establecen directa o indirectamente su aplicabilidad durante las hostilidades, mientras que otros indican expresamente su inaplicabilidad, finalización o suspensión automática una vez iniciado el conflicto” (Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D, 2010, pág. 334).

Muchos AMMA no se aplican durante “un conflicto armado. Entre ellos se encuentra el Convenio sobre la diversidad biológica (1992), la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (1994) y la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (1979)” (Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D, 2010, pág. 336)

Se tiene que la Comisión de Derecho Internacional -CDI-, recientemente aprobó el proyecto de Artículos con relación a los efectos de “los conflictos armados en los tratados en el que se adopta una definición amplia de conflicto armado y se regula el régimen aplicable a los efectos de un conflicto armado en las relaciones entre Estados en virtud de un tratado” (Meza, 2011, pág. 2).

Asimismo, Naciones Unidas aprobó un proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados; en la cual una gran importancia se encuentra en que finalmente el mismo comienza a “colmar una de las principales lagunas que existen en el Derecho de los

tratados, tal y como fue codificado en la Convención de Viena de 1969, que mediante la esquivia fórmula del artículo 73 excluyó la cuestión de la regulación” (Abegón, 2013, pág. 1)

Con relación a la aplicación de los tratados se declara con igual intensidad en cuanto a la fuerza armada por lo cual, deben comprenderse “también incluidas en el ámbito de aplicación del articulado, formas de conflicto en las que no se dé un uso de la fuerza armada, y especialmente las situaciones de ocupación de territorio que no encuentren resistencia armada y el bloqueo” (Abegón, 2013, pág. 6)

Con relación a la situación bélica que sufre Colombia en todo su territorio, se encuentran aquellas acciones que buscan proteger el medio ambiente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH –, muestra de ellos es la opinión consultiva hecha por Colombia en el 2016 a la CID, en la cual Colombia busca que se avale la tesis sobre “la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos”, manifestó la Cancillería en un comunicado” (El Espectador, 2018, pág. 1).

Lo anterior, debido al deterioro del medio ambiente en parte por las acciones del conflicto armado que ha producido daños sobre la región en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, “aunque el Caribe colombiano no ha sido el principal territorio de dominio de este conflicto, se han generado efectos nocivos en el tejido social, y los efectos económicos y políticos del conflicto armado se han dejado sentir en toda la región” (Sarmiento, 2016, pág. 12).

Asimismo, se tiene que “la región Caribe ha sufrido una serie de luchas –de mayor o menor intensidad- por el control territorial entre los actores del conflicto (guerrillas y grupos paramilitares, principalmente) que han afectado de manera notable a las comunidades” (Sarmiento, 2016, pág. 12).

También con relación al número de violaciones al Derecho Internacional Humanitario en el Caribe se tiene que:

La mayor parte de estas violaciones se ubican en la frontera entre los mundos Caribe y andino: el Magdalena Medio de Bolívar (27%) y Cesar (26%) Esta información evidencia la existencia de una lógica diferente del conflicto social respecto del resto de los departamentos caribeños, donde las cifras son considerablemente menores, así ellas sean altas: Magdalena (14%), Córdoba (12%), Sucre (10%). En cambio, Atlántico (6%) y La Guajira (5%) fueron los menos afectados: no hubo allí presencia guerrillera permanente y los grupos paramilitares no encontraban allí tanta resistencia (Sarmiento, 2016, pág. 6).

Respecto a lo anterior se evidencia que el conflicto armado ha afectado en mayor proporción a la región Caribe; muestra de ello, son las masacres ocurridas en su territorio a manos de la insurgencia, ocasionando “455 masacres durante el periodo de 1980 - 2012. Esta cifra corresponde a un 23% del total de masacres que tuvieron lugar en el país durante el mismo periodo” (Sarmiento, 2016, pág. 11).

De esta forma, la opinión consultiva para ser aceptada se estructuró a partir de unos criterios de interpretación que hicieron alusión a:

- “El efecto de las obligaciones derivadas del derecho ambiental en relación con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017, pág. 20).

- “La Corte desea subrayar que, aunque no le corresponde emitir una interpretación directa de los distintos instrumentos de derecho ambiental, indudablemente los principios, derechos y obligaciones allí contenidos contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de la Convención Americana” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017, pág. 21).

- “La existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017, pág. 22).

De igual forma la -CIDH-, estableció por medio de un comunicado en base a la opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos que “las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2018, pág. 1). Especialmente, estableció que los Estados deben:

- Prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos;
- Actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica;



- Cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales significativos;
- Garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente;
- Garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y
- Garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2018, pág. 1)

Por consiguiente, la CIDH “recordó, Además, que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2018, pág. 2).

Conforme al desarrollo de los preceptos constitucionales ya mencionados – artículo 80, 88 – a los que se suman el 226 referente a que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional; es muestra clara, que el país hace presencia en foros, conferencias, y organismos internacionales, a través del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la oficina de Asuntos Internacionales.

Gracias a esa presencia, Colombia, ha suscrito una variedad de acuerdos multilaterales, donde se establece la obligación de respetar, contribuir y proteger variables ambientales, los cuales, por la vía del bloque de constitucionalidad, se han incorporado a la legislación interna.

Situación que le ha permitido al Estado colombiano tener posiciones nacionales en el derecho internacional, en materia medio ambiental, con referencia a: el cambio climático, biodiversidad, mares y pesca internacional, negociaciones comerciales, protocolo de Montreal, sustancias químicas y cooperación internacional.

### **1.3. El delito ambiental**

Se tiene que en Colombia los daños contra el medio ambiente se les llama *delito ambiental* el cual es considerado como un delito social, “pues afecta las bases de la existencia social económico, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción de sistemas de relaciones hombre – espacio” (Ecoportal, 2004, pág. 1).

Es fundamental aclarar que en Colombia existen algunos delitos ambientales tipificados en la legislación como es el caso de dañar o arrojar basura a un ecosistema natural puede ser considerado un delito, se tiene que la ignorancia en Colombia con relación “a este tema es sorprendente. Un gran porcentaje de personas tiende a botar la basura en la calle sin ningún tipo de conciencia, pensando quizás que esa bolsa o ese paquete va a desaparecer por arte de magia” (Ramírez, 2017, pág. 1).

Así, en Colombia la dinámica legislativa, la evolución doctrinaria, la producción jurisprudencial y de presencia de fenómenos socio – jurídicos, obligan al Congreso Nacional, a actualizar, completar y regular nuevas conductas ambientales, con el fin de preservar, conservar, proteger el ambiente.

Hasta 1982, rigió lo que se conoció como el “Código del 36”, en 1979 el Congreso de la República, por medio de una ley otorgó pro tempore, facultades especiales al gobierno, para que expidiera el nuevo Código Penal, el cual fue conocido como el Decreto – Ley de 1980. En esta codificación por primera vez, aparece un capítulo relacionado al “delito ecológico”.

Si bien no fue todo “un tratado punitivo ambiental, ya que se advertía la intención del legislador de propender por la sanción y represión punitiva en contra de conductas muy evidentes y reiterativas de comportamiento anti – ecologista ambientalista” (Bulla, 2012, pág. 290).

Entre los años 1999 – y 2000, el entonces Fiscal general Gómez Méndez, tramitó una reforma de los Códigos Penal y de Procedimiento, que se han conocido como las Leyes 599 y 600 de 2000, no sin antes decir que, entre reforma y reforma, “el legislador, ha introducido tipos nuevos, agravación o incremento de penas, etc. En el Código Penal, no solo se mantuvieron los tipos penales del código del 80, sino que se incrementaron algunos injustos ambientales y se incrementaron las penas” (Bulla, 2012, pág. 291).

Ya con la entrada en vigor del sistema Penal Acusatorio, fue preciso adecuar o reformar el Código de Procedimiento Penal y redefinir competencias. Es así como se da la Ley 906 de 2004 que se acompaña del Código Penal Ley 599 de 2000. En la parte final del Título X, en su capítulo VI, y todo el título XI, del Código Penal, están consagrados los hechos punibles o injustos, que reprimen, sancionan o penalizan las conductas que violen, lesionen o afecten los recursos naturales renovables y no renovables.

Los siguientes son los delitos contra el Medio Ambiente establecidos en la legislación colombiana:

- Título XI: De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Capítulo único: Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente – Ley 599 de 2000 –. Antes de entrar

a exponer cada uno de los artículos en detalle. Se hace necesario establecer que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 gravó o incrementó las penas de todos los injustos y que ya están incorporados en los que a continuación se anuncian: el artículo 29 de la Ley 1453 de 2011 lo modificó de la siguiente manera:

- Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, artículo 328 del Código Penal *ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables*. Artículo que adicionó los verbos: apropiarse, mantener, se agregó además la expresión “biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana”; así como se incrementó la pena privativa de la libertad y se aumentó la pena pecuniaria. Se agravó el injusto, respecto de la comisión de esas conductas respecto de especies en vías de extensión o frente a especies raras o que sólo migran por el suelo colombiano.

Vale la pena establecer en este punto la diferencia entre recursos renovables y no renovables. Los primeros hacen referencia a “aquellos cuya existencia no se agota con su utilización racional, pues vuelven a su estado original o se regeneran; y los segundos son los que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar – oro, plata, carbón –” (Bulla, 2012, pág. 298).

- Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales, contenido en el artículo 329 del Código penal. Modificado por el artículo 30 de la Ley 1453 de 2011, adicionando el aprovechamiento, la explotación o la extracción de los recursos. Es decir, se mejora la redacción y se cierra la puerta a la impunidad frente a conductas no establecidas.

- Daño en recurso natural, el artículo 331 del Código Penal modificado por el artículo 33 de la Ley 1453 de 2011, introduce la expresión: *o los que estén relacionados con estos*, para hacer una extensión a los recursos naturales que tienen estrecha relación con el entorno, quitando de

paso, la expresión que decía: *causándoles una grave afectación o a los que están asociados con pestos o se afecten áreas especialmente protegidas*.

La novedad de este apartado consistió en agravar la situación de injusto, frente a dos eventos muy puntuales y concretos, a saber: “que afecten negativamente ecosistemas naturales que hagan parte de áreas especialmente protegidas, sin importar el nivel nacional, regional o local y la segunda, es por la acción u omisión – negligencia, imprudencia, impericia – de las autoridades de control y vigilancia” (Bulla, 2012, pág. 301).

- Contaminación ambiental, el artículo 332 del Código Penal, modificado por el artículo 34 de la Ley 1453 de 2011, aumento las conductas e introdujo las variables de provocar la contaminación o inducirla, también amplió el texto en el sentido de prever la realización directa o indirecta de vertimientos, emisiones superen el doble de lo permitido por las disposiciones vigentes, cuando las conductas establecidas, se realicen sobre zonas o áreas protegidas como parques, o sectores de importancia ecológica, la cual, debe estar previamente determinada – principio de tipicidad –; por medio de artificios, engaños, subterfugios o de manera clandestina se realicen los vertimientos – derrames o desagües – o las emisiones atmosféricas; que se esté frente a un desacato, desobedecimiento de una orden de autoridad competente y finalmente que se haya omitido, ocultado o reservado información o que la entregada a la autoridad ambiental sea engañosa, ficta o que no corresponda con la realidad y la verdad para emitir o verter.

Como complementó de lo anterior, el artículo 35 de la Ley 1453 de 2011, realizó un importante aporte, en cuanto a la contaminación ambiental por residuos peligrosos que vendría a hacer el artículo 332 del Código Penal. Dicha reforma se orientó a establecer que el que incurra en cualquiera de las siguientes conductas: almacenar – guardar, transportar, acarrear, trastear, enviar, disponer, acomodar, instalar, de forma inadecuada, sin las previsiones legales y reglamentarias,

desacatando la normatividad vigente; que ponga en riesgo el recurso natural – lagos, reservorios, humedales, ríos, entre otros –.

La agravación punitiva, está directamente relacionada, cuando con cualquiera de los comportamientos, se ponga en peligro la salud humana. “Estos injustos, no requieren que el vertimiento, almacenamiento o transporte lesione efectivamente uno cualquiera de los elementos del ambiente, basta que los ponga en peligro o se exponga, por ese sólo hecho se tipifica y consuma la conducta” (Bulla, 2012, pág. 303).

- Delito por explotación minera, la explotación minera es uno de los delitos más discutidos en la actualidad, por lo que se tiene que mientras para unos la ven como un sector de mucha rentabilidad para el país, para otros con esto se destruye el medio ambiente; por lo cual en el artículo 36 de la Ley 1453 de 2011 se añade al artículo 333 del Código Penal lo siguiente:

El que provoque, contamine o realice directa o indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Hay que señalar que “la explotación minera tiene un gran impacto en la naturaleza, puesto que utiliza químicos altamente contaminantes, los cuales, si no se desechan adecuadamente, puede causar un daño irreversible” (Ramírez, 2017, pág. 1).

La finalidad del derecho penal es lograr la protección del orden social colectivo. En lo que concierne al sujeto que ejerce acciones delictivas, cuya finalidad está dirigida a la búsqueda de una reparación que busque un correctivo del infractor de la norma penal, en la cual se ha dejado por fuera las acciones terroristas ejercidas por los grupos armados.

En este orden de ideas, los retos que impone la norma penal colombiana en la tipificación de los delitos ambientales, es concretar un sistema normativo articulado, “en donde se integren los principios de precaución y del contaminador pagador, y se defina un procedimiento claro y adecuado para la responsabilidad de las personas jurídicas que consagre la responsabilidad objetiva por el daño causado” (Martínez, 2013, pág. 65).

Esta organización normativa delimitaría ampliamente el ámbito de ejercicio del derecho penal. Obteniendo de esta forma una legislación sólida, contundente y efectiva, acorde con los postulados del derecho penal fragmentario, subsidiario y última razón de Estado.

### **1.3.1. Jurisprudencia en materia ambiental**

Para la Corte es indiscutible que la contaminación al medio ambiente ha ocasionado daños invaluable a la naturaleza generando consecuencias nocivas para vida humana. De modo tal, que el “daño ambiental, involucra para la humanidad un proceso serio de reflexión y desafíos para los Estados en orden a fortalecer los principios fundamentales que lo soportan en la consecución de un entorno ecológico sano” (Corte Constitucional Sentencia C - 449, 2015). Esto lleva a establecer la importancia del principio de racionalidad del ambiente, que radica en disminuir el uso desmedido y abusivo de los recursos naturales.

Por su parte, la sentencia T – 080 (2015) señala que el objetivo de la política pública ambiental es el de prevenir todo tipo de degradación del entorno natural.

Las dinámicas propias de la actividad humana producen acciones contaminantes, sean de forma voluntaria o involuntaria, a las cuales es preciso responder de forma integral. Aun en estos escenarios, ya producido el daño, el plan de reparación debe vincularse con una finalidad preventiva. El efecto disuasivo de la sanción o de la medida de protección ordenada, así como la restauración “*in natura*” del ecosistema afectado contribuyen al propósito final de preservar el medio ambiente y sus recursos (Corte Constitucional Sentencia T - 080, 2015).

De ahí que, en diversos pronunciamientos la Corte ha establecido que la “conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos” (Corte Constitucional Sentencia T - 154, 2013)

La protección y optimización del ambiente ha adquirido una relevancia que se traduce en el interés constante por parte del Estado en pro de su protección, a fin de evidenciar aquellas acciones que ponen en peligro el medio ambiente y que contribuyen a la afectación del bienestar y el desarrollo de los pueblos. Es así, como en “el mundo moderno ha establecido que la mayor causa del deterioro en el ambiente obedece a situaciones antropogénicas; esto es, las surgidas de la propia actividad humana, producidas en el proceso de satisfacción de sus necesidades” (Corte Constitucional Sentencia C-632, 2011).



También se señala en la sentencia en comento que el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el “manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural” (Corte Constitucional Sentencia C-632, 2011).

En este sentido dicha sentencia, recalca la importancia de algunas normas ambientales que han permitido consolidar parte del control que el Estado colombiano quiere ejercer sobre el medio ambiente:

Ley 99 de 1993 concreta en el artículo 63 los principios para proteger el ambiente.

Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional, el cual contiene los procedimientos y medidas para legislar, regular y controlar el exceso de residuos y materiales. Establece, además los parámetros para controlar las actividades que afecten el medio ambiente.

Decreto Ley 2811 de 1974: o Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.

Ley 23 de 1973: Por medio de esta se establecen alternativas y estrategias para la conservación, control de la contaminación del medio ambiente y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la población.

Se tiene entonces que con relación a la concepción de bien jurídico comunitario del medio ambiente, ha dejado estipulado que la relación del medio ambiente con el factor personal compromete varios aspectos, bajo el entendido que el medio ambiente “pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes” (Corte Constitucional Sentencia C-703, 2010)

En la Sentencia C-595 de 2010 se prevé la importancia del ambiente como bien jurídico que merece ser protegido para la supervivencia del ser humano.

En la Sentencia T-411 del 2002 se habla sobre diversos derechos como: la propiedad privada, la libertad de empresa los cuales deben tener protección siempre y cuando respeten el ambiente natural conforme lo establece la Constitución Nacional.

En la Sentencia C-843 de 1999 la Corte precisa que la norma tiene la potestad de adjudicar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, debido a que éstas se encuentran facultadas para ser sujetos activos de diferentes tipos penales, en especial de los que pueden ocasionar grave detrimento para la comunidad, o afectar bienes jurídicos con clara protección constitucional, como el medio ambiente.

También la sentencia C-320 de 1998 habla sobre el daño ambiental, la conducta antijurídica, y el daño ecológico.

Como se puede observar de la revisión jurisprudencial, la Corte ha establecido desde siempre la importancia del medio ambiente para la humanidad, y la necesidad de su conservación; pero poco o nada se ha dicho del delito ambiental y mucho menos de los ataques perpetrados por los grupos terroristas.

## **Capítulo 2.**

### **2. Dinámica del medio ambiente en el contexto del conflicto armado**

#### **2.1. Introducción**

Es importante conocer más a fondo cual entidad se encarga de velar por la protección del medio ambiente, se tiene que en el país la máxima autoridad ambiental es el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible quien tiene como fin la de “promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano” (Ministerio del Medio Ambiente, 2017, pág. 1)

Hay que hacer énfasis en que el medio ambiente es uno de los perjudicados en medio del conflicto armado debido a que a raíz de estas guerras hace que “los campos han sufrido daños irreparables gracias al abuso de los medios de destrucción masiva. Ciertas especies de fauna y flora se han visto casi extintas y los frutos de la tierra se han sido alterados” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 4)

Por lo cual también se dice que el medio ambiente es un componente que coloca en riesgo la integridad territorial del “Estado, la paz y la estabilidad interna e internacional, el bienestar humano, los valores, la identidad, el modo de vida, así como el desarrollo económico y humano de un grupo, una sociedad, un Estado o, incluso, de los individuos” (Lavaux, 2004, pág. 11); es decir, la posibilidad de conflicto armado se acrecienta cuando existen cambios o escasez en los recursos naturales y en su poca disponibilidad como por ejemplo los cultivos ilícitos que afectan el medio ambiente.

Con base a estos cultivos ilícitos hacen ver a los ecosistemas como actores indirectos de la confrontación puesto que el uso y apropiación de estos crean interacciones sociales, de “colaboración y de conflicto, cuyas características se relacionan, a su vez, con las de los ecosistemas mismos. Así, las relaciones cambian, respecto a un recurso dado (agua, tierras, por ejemplo), dependiendo de su disponibilidad; en general, recursos escasos darán lugar a conflictos” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 10)

Es fundamental resaltar las diferentes consecuencias que afectan al medio ambiente con relación al conflicto armado entre las cuales se encuentran “la defaunación, pérdida de la biodiversidad, erosión de suelos, destrucción de fuentes hídricas y deforestación también existen factores como el desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, erradicación de los mismos, apropiación de tierras para la manutención de las comunidades que allí viven” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 12).

Entre las consecuencias más notorias se resaltan los cultivos ilícitos y la deforestación esto debido a que como el gobierno ha estado erradicando esta clase de cultivos, esto permite que se trasladen a diferentes zonas donde no hay presencia de las fuerzas oficiales, por lo que agrava el problema ambiental debido también a la fumigación de estos cultivos, esto a traído consigo una gran destrucción de bosques andinos e interandinos en los cuales se desarrollan y viven la gran mayoría de biodiversidad Colombiana; en base a lo anterior se tiene que:

La Fundación Piensa Verde reveló recientemente que, en los últimos 20 años, se han perdido 6.210 millones de hectáreas de bosques colombianos a causa del conflicto armado, que conlleva al agotamiento del agua y la desertificación. Daniel Quintero, su director, advirtió que el 50% de nuestros bosques están en riesgo por

la minería ilegal, la destrucción de árboles, la voladura de oleoductos y la ganadería expansiva (Arias, 2012, pág. 1)

Estos problemas son múltiples puesto que presentan impactos en las fuentes de agua y los suelos de los sitios de las plantaciones lo que conlleva a otro factor como lo es la deforestación.

Lo anterior hace referencia a que el impacto de los cultivos ilícitos sobre el bosque va más allá de la pérdida de la cobertura forestal con relación a este tema Andrade (2002) señala que:

La tala para establecer cultivos ilícitos, así como otras actividades agropecuarias por parte de los colonizadores de la frontera agrícola, genera la fragmentación de los ecosistemas boscosos lo cual, a su vez, tiene un negativo impacto en la biodiversidad y otras funciones de los bosques. Con el tiempo se ha hecho evidente que no existe un tamaño mínimo de los bosques crítico para mantener sus funciones “sino un gradiente de pérdida de funciones y valores ambientales de los ecosistemas, conforme disminuye su tamaño y aumenta su fragmentación. Así por ejemplo en las selvas andinas, en fragmentos con menos de 1000 hectáreas que han permanecido aislados por más 50 años se producen pérdidas de hasta el 50% de las especies de aves (Andrade, 2002, pág. 8).

Entonces es de resaltar que entre las diversas causas que afectan el medio ambiente en el país debido a las actividades económicas como la minería ilegal, la explotación petrolera y los cultivos ilícitos “han sido la migración poblacional al interior del país, como un fenómeno que conlleva una mayor demanda por todos los recursos ofrecidos por sus ecosistemas, en particular

los bosques, demanda que con frecuencia se torna destructiva y degradadora” (Rodríguez, 2003, pág. 3).

Así, puntualmente la minería ilegal es una de las actividades que más deterioro ha generado en el medio ambiente, en términos de “degradación ambiental de varias regiones que traen como efectos contaminación de las aguas, deforestación, extinción de especies animales y vegetales y miles de personas afectadas” (Montaño, 2015, pág. 1).

Lo expuesto conlleva a que la minería afecta el medio ambiente debido al uso de sustancias peligrosas como el mercurio y cianuro que se utilizan para la separación de los metales; por lo cual se tiene que, “en varios municipios de Antioquia, Caquetá y Nariño, entre otras regiones del país, se han disparado las alertas por supuestas contaminaciones de fuentes hídricas y alimentos con los químicos que son utilizados en la minería ilegal” (VICE, 2015, pág. 1).

También contribuye al deterioro en “los ecosistemas, principalmente en los ríos, por cuenta del uso de dragas que absorben toneladas de arena que luego son filtradas en busca de metales preciosos. Junto con la arena, la maquinaria capta todo lo que encuentra a su paso” (VICE, 2015, pág. 1)

Es importante destacar que según cifras se tiene que “en los últimos 20 años el conflicto armado ha sido el causante de la pérdida de 6’210.000 hectáreas de bosque, si no se cambia la situación en los próximos diez años Colombia podría perder otros dos millones de hectáreas” (El País, 2012, pág. 1).

Como un factor determinante en el deterioro del medio ambiente se encuentra el narcotráfico, el cual a raíz de la producción de narcóticos elaborados en base de gasolina, amoníaco y ácido sulfúrico son catalogados como productos químicos “los cuales causan un efecto negativo para el medio ambiente. Así, según datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cerca de

ocho mil hectáreas de bosques fueron afectadas por el procesamiento de drogas durante las últimas dos décadas” (VICE, 2015, pág. 1).

La consecuencia de la guerra para el medio ambiente se comienza a raíz de que el conflicto en Colombia inició en la zona rural depositaría de los más amplios espacios medio – ambientales y “como la tierra no es el único recurso que ha estado en disputa, sino en general el uso de los recursos naturales, tales como: agua, madera, productos no maderables, hacen que esta problemática día a día sea más inmanejable. Además, “lo ambiental continúa jugando un papel de relevancia como combustible del conflicto armado” (Useche, 2015, pág. 4).

## **2.2. Conflicto armado y medio ambiente**

### **2.2.1.Desarrollo del término conflicto**

El concepto a desarrollar sirve de base para comprender a fondo los conflictos internos que viven países como Colombia. De esta forma, el conflicto en su expresión más amplia se comprende como: Lucha o disputa “entre dos o más partes. También puede significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado, sin que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada” (Significados, 2018, pág. 1).

De acuerdo con la definición anterior, el conflicto se puede observar tres formas de conflictos:

- **Real:** Quienes hacen parte de éste presentan un variado número de diferencias que han abordado, pero no han podido remediar.

• **Irreal:** Se da a partir de una mala interpretación que puede solucionarse, se media una explicación o diálogo a fin de resolver el problema.

• **Inventado:** Se origina a raíz de una interpretación equivocada sobre una situación ocasionando de forma consciente el conflicto. Puede originarse como una simple broma o un simple juego, o por el deseo de dañar, al contrario (Psicoactiva, 2017, pág. 1)

Asimismo, se tiene que el conflicto se da entre dos o más “partes (individuos, grupos, departamentos, organizaciones, países, etc.) que perciben la incompatibilidad de sus intereses. Los conflictos surgen cuando se considera que la acción de una parte interfiere o perjudica los objetivos, las necesidades o las acciones de la otra parte” (Los Recursos Humanos, 2015, pág. 1).

Es fundamental tener conocimiento que el conflicto es un fenómeno natural “en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos” (Silva, 2008, pág. 29).

“Así mismo, el conflicto contribuye al desarrollo de funciones de lealtad, que son reforzadas por factores emocionales; al igual el desarrollo de ideales y valores, pulidos y perfeccionados por las demandas del conflicto social, es otra de las funciones verificables” (Silva, 2008, pág. 39).

Igualmente, los conflictos permanecen en los factores sociales que motivan “la forma como evoluciona la sociedad. Surgen en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes; responden a un estado emotivo que produce tensiones, frustraciones; corresponden a la diferencia entre conductas, la interacción social, familiar o personal” (Fuquen, 2003, pág. 265).

Desde otro punto de vista, Suares (1996) lo considera como un proceso interaccional que, como tal, tiene un origen, desenlace y en diferentes circunstancias puede llegar a su fin y en otras



ocasiones permanecer en el tiempo. Entonces, el conflicto nace a partir de dos vertientes con diferentes ideales generándose con ello situaciones ambivalentes que generalmente se dan en contraposición, “llegando en algunas ocasiones a la agresión mutua, donde quienes intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, pensamientos, afectos y discursos, el autor identifica, de esta manera, la conducta y el afecto como elementos esenciales del conflicto” (Suarez, 1996, pág. 87).

Por otro lado, Ander (1995) ha visto el conflicto como una situación que emerge del componente social, el cual parte de diferencias ideológicas, sociales, políticas o económicas. Postura, que también tiene Bonilla (1998) citado por Fuquen (2003) quien ha visto el conflicto desde el componente familiar como eje central del orden social que ubica a las personas en diferencias que llevan a la disputa por defender los intereses de cada quien, generando una contradicción, la cual se “entiende la oposición de dos o más personas o grupos étnicos, sociales y culturales, por incompatibilidades frente a algún asunto que les compete, y en oposición a la otra persona, la lucha que se presenta por la intención de su decisión” (Fuquen, 2003, pág. 267).

En este mismo sentido, Jares (2002) ve el conflicto como un problema de discrepancia entre los individuos o grupos haciendo énfasis a aspectos estructurales que llevan a determinar que el conflicto existe las diferencias están presentes.

Todos estos conceptos admiten ver el conflicto como algo negativo. Sin embargo, es necesariamente “a partir del conflicto que se genera una oportunidad muy importante para manejar procesos de aprendizaje que reflejan experiencias positivas, en las cuales los actores del conflicto interactúan y promueven oportunidades para plantear viabilidades o alternativas frente a la diferencia” (Fuquen, 2003, pág. 267).

En este sentido, los componentes del conflicto son relevantes para comprender mejor el término, los cuales hacen referencia a:

- **Las partes del conflicto.** Son quienes integran las diferencias divididas generalmente en dos bandos, quienes argumentan sus posiciones conforme el interés que se tenga sobre el asunto que haya dado lugar a la disputa. Así, sin importar las diferencias sus integrantes, asumen diferentes roles: Los miembros principales quienes son las cabezas visibles o dirigentes; los miembros secundarios quienes se unen por algún interés particular, pero no tienen claro, que están en medio de un conflicto; los intermediarios quienes resuelven o facilitan la solución del conflicto.

- **El proceso.** Comprende el desarrollo y la evaluación del conflicto, mediada por las actitudes, soluciones y acciones que presentan los diferentes actores.

- **Los asuntos.** Son los aspectos que atañen a quienes integran el conflicto.

- **El problema.** “Hace referencia a la definición de la situación que origina el conflicto, los objetivos de la disputa y sus motivos” (Fuquen, 2003, pág. 270).

- **Los objetivos.** Corresponden a las metas deseadas y decisiones alcanzadas.

Abordado lo anterior, se tiene que la concepción del conflicto de armado hace referencia al “conflicto interno que se desarrolla en Colombia desde cerca de 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha” (Ruiz, 2014, pág. 1).

Es importante recalcar que con relación al conflicto social armado el informe general del grupo de Memoria Histórica señala dentro de los factores del conflicto: “la persistencia del problema agrario, y la propagación del narcotráfico; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 111).

También se tiene que el conflicto armado “transcurrió en medio de cambios sociales y económicos asociados al avance de la industrialización y al rápido incremento de la urbanización implicando la expansión de la cobertura del sistema educativo y la expansión de la secularización de la sociedad” (Grupo de Memoria Historica, 2013, pág. 128).

Se tiene así, que el conflicto interno se ampara de unos factores que obedecen a la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra, esto se da porque los diferentes grupos han formado diferentes características de retención de los recursos y de control de su población, “separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas” (Fajardo, 2014, pág. 6).

Asimismo, a estos factores se agrega la presencia de Colombia en la economía internacional del narcotráfico, aspecto que ha sido determinante en la profundización del conflicto social y armado.

Otro factor relevante es el de la incidencia del narcotráfico el cual frente a la vinculación de Colombia “con la economía internacional del narcotráfico marca una fase ascendente en el conflicto social y armado que afecta al país. Los antecedentes de esta vinculación datan, al menos de comienzos de los años 1930 y están relacionados con el tráfico de drogas” (Sáenz, 1996, pág. 65).

Con base en lo anterior en el período siguiente, los campesinos a raíz del desalojo de la tierra y por diferentes razones “atraídos por las colonizaciones fueron contactados por los agentes del narcotráfico que encontraron así los insumos estratégicos para su desarrollo, a saber, tierras de muy bajo costo y mano de obra barata y empobrecida, lejos del control del Estado” (Fajardo, 2014, pág. 35). Por lo cual se dio que una parte de pequeños y medianos productores ubicados en

diferentes territorios fronterizos “y al igual que en otros países de la región en condiciones similares, debieron optar por la escogencia de los “cultivos ilícitos” como opción frente a la imposibilidad de competir con las agriculturas subsidiadas de los países desarrollados” (De Rementeria, 2001, pág. 35).

Por consiguiente, es muy cierto que para poner fin a un “conflicto en que se ha involucrado durante tantas décadas la conciencia manipulada de las masas, es de absoluta necesidad contar previamente con un período adecuado de democratización esencial de la información, que se pueda traducir en desarme de las conciencias” (Giraldo, 2015, pág. 31).

Es fundamental tener presente que los impactos que deja el conflicto armado en la sociedad hacen referencia a:

La ausencia de centenares de miles de personas, arrancadas de manera violenta y cruel de sus entornos familiares, sociales y políticos, ausencia que reconfigura necesariamente las energías que impulsan la vida política, social y espiritual de la nación, haciendo que los vacíos sean copados de hecho por las energías de los victimarios, adicionando a la carga emocional y a las secuelas de penuria económica, multitud de estigmas familiares, sociales y políticos y frustraciones éticas profundas que necesariamente revierten en la persistencia del conflicto (Giraldo, 2015, pág. 39).

Por lo cual es fundamental pactar por medio del acuerdo de paz la seguridad de la sociedad para que no sigan siendo el blanco de estos conflictos armados.

Sin embargo, existe otro conflicto interno el cual ha ido empeorado en los “últimos años y con crecientes niveles de degradación ha generado una grave crisis humanitaria en donde la superación de éste es el principal tema en la agenda nacional y de los esfuerzos de cooperación por parte de la comunidad internacional” (Chica, 2007, pág. 1).

Cabe anotar que para solucionar este conflicto en Colombia se generaron “procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción, con el objeto de que esto se constituya en componente de un amplio proyecto de reconciliación y paz, enmarcados en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos” (Chica, 2007, pág. 1).

Hay que ver que existe “una verdadera amenaza de que, si este proceso no es percibido como justo, la situación de conflicto puede rápidamente reescalar en una violencia de mayores proporciones (hostilidades, confrontaciones armadas, secuestros, etc.) generando una desestabilización del país y de la región” (Pastrana, 2006, pág. 7).

La principal causa de pérdida de bienestar en el país se debe al conflicto armado interno y la violencia armada en Colombia lo cual se debe a “la demanda de recursos para afrontarlo, así como para atender sus graves consecuencias humanitarias y sociales, explica, por su parte, no sólo los principales rubros de destinación del gasto, sino una presión importante sobre las arcas de la Nación” (Restrepo, J y Aponte, D, 2009, pág. 28).

Acerca de la situación actual del conflicto se tiene que “una de las grandes dificultades que se presenta al estudiar un conflicto armado interno es poder conocer su situación reciente y lograr hacer prospectiva sobre su desarrollo. Además de las dificultades asociadas a las deficiencias de la información” (Restrepo, J y Aponte, D, 2009, pág. 30).

Se puede observar que “desde la década de los sesenta Colombia se halla inmersa en un conflicto armado que involucra múltiples actores: las guerrillas de izquierda, los paramilitares de

derecha, los narcotraficantes, el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil” (Yaffe, 2011, pág. 191).

Kalyvas (2007) “plantea que existen tres factores fundamentales para la irrupción de guerras civiles: antagonismo étnico, presencia de recursos naturales y debilidad estatal. Cada uno de estos elementos incrementa el riesgo de guerra civil, especialmente en países pobres” (pág. 416); reflejo de la debilidad institucional del Estado, con ocasión de los altos índices de corrupción ocasionando con ello la permanencia del conflicto en el medio donde se haya originado.

También “existen algunos estudios iniciales se han centrado en las llamadas “causas objetivas” para explicar el conflicto armado. Según esta aproximación las desigualdades socioeconómicas, la exclusión y discriminación de algunos sectores, y la injusticia, generan resentimientos o carencias” (Yaffe, 2011, pág. 1).

En este orden de ideas, el conflicto también obedece a una guerra por el poder local apoyado en la descentralización que le ha dado a estos entes locales cierta autonomía; situación que ha abierto el espacio para el conflicto y la apropiación del territorio, influenciando aspectos como la política, generando un espacio para la “conveniencia de los grupos irregulares o para consolidar su dominio territorial desde lo local” (Sánchez, F y Chacón, M, 2005, pág. 1).

Asimismo, se pueden analizar las relaciones entre pobreza y conflicto en Colombia adoptando un enfoque institucionalista, por consiguiente:

De acuerdo con este enfoque, las relaciones entre pobreza y conflicto en Colombia han estado mediadas por las instituciones existentes. Partiendo de un legado histórico de exclusión de las instituciones iniciales, se muestra que tales instituciones, junto con características idiosincráticas de la historia colombiana,

como la lucha armada entre los partidos políticos tradicionales, los conflictos agrarios no resueltos, el apoyo externo en la guerra fría, la existencia de una fuerzas militares mal equipadas y entrenadas sin órdenes directas de proteger a los individuos y las comunidades y la descentralización ocurrida a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, dieron nacimiento y forma al conflicto armado interno y a las condiciones actuales de pobreza en Colombia (Restrepo, J y Aponte, D, 2009, pág. 20)

Finalmente, se puede establecer que el término conflicto es un término inacabado, del cual emergen y seguirán emergiendo muchas situaciones que distan de brindar una solución pronta y efectiva a la situación bélica que vive el país, pese a la firma del Acuerdo de Paz que a más de prometer imposibles ha generado otro tipo de “conflicto” que es el relacionado a las inequidades existentes en el sistema normativo colombiano frente a la situación de las víctimas, siendo un ejemplo emblemático los ataques al medio ambiente con ocasión del conflicto armado.

### **2.2.2. Geografía de la afectación de los recursos naturales con ocasión del conflicto**

Es importante aclarar que respecto a la geografía en cuanto al medio ambiente se da debido a las diferentes actividades como los cultivos de coca y amapola las cuales son considerablemente nocivas para el medio ambiente, que ocupa áreas extensas de uso de químicos y deforestación; “a pesar de la capacidad de los bosques para recuperarse, la colonización provocada por el cultivo de estupefacientes tiende a crear grandes y permanentes cambios en los paisajes rurales con sustanciales impactos ambientales” (Restrepo, J y Aponte, D, 2009, pág. 338). Los impactos han

sido tales, que el país se encuentra en una problemática ambiental de grandes dimensiones, al punto que en Colombia los estudios “de largo plazo demuestran que el nexco coca – deforestación por campañas de erradicación generó una difusión secuencial a 23 de los 32 departamentos del país, incluyendo una nueva zona de producción en el Chocó colombiano, un punto de alta biodiversidad” (McSweeney, 2014, pág. 7).

Asimismo, se tiene que una inquietud por el medio ambiente es además muy perceptible en los proyectos de paz; por lo cual el Magdalena Medio ha sufrido dificultades medioambientales duros y “también enfrentado una contaminación ambiental creciente, como la del río Magdalena, también la deforestación y la destrucción de ecosistemas, principalmente debido a la economía de la coca y a las industrias del petróleo y de la palma de aceite” (Restrepo, J y Aponte, D, 2009, pág. 512).

Por otra parte, el consecuente desplazamiento de más del 8% de la población y la toma ilegal durante el conflicto armado han formado un nivel de “concentración de la propiedad de la tierra que se ubica entre los más altos del mundo. Esto ha contribuido a la intensificación de algunas presiones ambientales, en particular, la conversión de los bosques en tierras para la cría de ganado” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014, pág. 45).

Se tiene que muchos recursos naturales legales en Colombia como el, las esmeraldas, el ferroníquel, las flores, banano, el café, el oro, el petróleo y el aceite de palma se encuentran “asociados con el conflicto armado en varias regiones colombianas, esto debido fundamentalmente saqueo del recurso o de sus beneficios o la extorsión de propietarios y productores constituye la principal motivación para la presencia de actores ilegales en una región determinada” (Leiteritz, R; Nasi, C y Rettberg, A, 2009, pág. 220).



Por lo antes expuesto, se hace necesario modificar la norma penal; cuya modificación debe vincular de forma clara y precisa las acciones ejercidas por los grupos armados. Mientras se continúe sancionando este tipo de delitos con un “sujeto indeterminado” continuará existiendo el ataque sistemático al medio ambiente, sin mediar solución alguna.

## **2.3. Integridad territorial y conflicto armado**

### **2.3.1. Los ecosistemas como actores indirectos del conflicto armado**

En Colombia existen zonas donde el conflicto armado a influido como los ecosistemas, entre los que se encuentran “la Amazonía, el Chocó bio-geográfico, la Cordillera de los Andes y la Orinoquia que hacen de Colombia uno de los países más biodiversos y ricos en fuentes de agua y suelos productivos del planeta” (Morales, 2017, pág. 5).

También como consecuencia del conflicto armado ha sido “la contaminación de suelos y fuentes de agua en Colombia por parte de algunas de las economías ilegales asociadas a estos grupos requieren del uso intensivo de sustancias químicas peligrosas que se desechan irresponsablemente, afectando ecosistemas y poblaciones” (Morales, 2017, pág. 10).

Asimismo, es importante señalar que “en algunas zonas los grupos armados también defendieron bosques y otros ecosistemas en la medida en que les eran útiles para establecer corredores de movilidad, retaguardias clandestinas y, en general, una ventaja militar en la guerra de guerrillas” (Morales, 2017, pág. 12).

Por otra parte, los ecosistemas y sus bienes como actores indirectos del conflicto armado consiguiendo que “la apropiación y uso de tales recursos generen interacciones sociales, de

colaboración y de conflicto, cuyas características se relacionan, a su vez, con las de los ecosistemas mismos” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 10)

Con relación a este problema es necesario resaltar que:

Los ecosistemas también son víctimas directas e indirectas del conflicto armado: campos, selvas y páramos 'contaminados' con minas antipersonales y municiones sin explotar, cuya remoción es uno de los más complejos desafíos que conlleva la paz; bosques arrasados para dedicarlos a cultivos de uso ilícito y, de remate, fumigados como parte de la estrategia para combatir el narcotráfico; cuerpos de agua destruidos por los efectos de las voladuras de oleoductos; ecosistemas enteros arrasados por la 'minería armada', esa forma de violencia implacable contra la naturaleza y contra las comunidades, que además es fuente de recursos para incrementar la violencia y la guerra; desplazamiento de campesinos hacia las zonas urbanas, que incrementan su propia vulnerabilidad y las condiciones de riesgo en la ciudad (Wilches, 2012, pág. 1)

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concretar el daño que hace el conflicto armado con relación a los ecosistemas, los cuales son los más afectados por este flagelo.

Algunos ecosistemas que han sido afectados de forma negativa por la existencia del conflicto armado requieren ser recuperados “como son las zonas minadas, los ecosistemas acuáticos degradados por la afectación a los pozos petroleros, la contaminación y degradación ocasionada por las malas prácticas mineras y la deforestación, entre otros” (Hochschild, F, 2014, pág. 38).

Además, se tiene que una forma del conflicto armado que afecta los ecosistemas boscosos o de mayor fragilidad “es la apropiación y uso de sus espacios como ejercicio de poder, dirigido a limitar el acceso de las comunidades a medios productivos y a forzar su vinculación a las actividades económicas y políticas de interés de algunos sectores” (Hochschild, F, 2014, pág. 83).

Asimismo, se tiene que el impacto que crea el conflicto armado con relación a los ecosistemas “hace que el medio ambiente, concebido desde los elementos naturales que lo componen sin incluir necesariamente las relaciones sociales y culturales que hacen parte del concepto, y tampoco únicamente los recursos naturales puedan ser considerados como víctimas o beneficiarios del conflicto” (Rodríguez, C; Rodríguez, D y Durán, H, 2017, pág. 19).

Los gastos militares pueden limitar el flujo de financiación necesaria para la gestión medioambiental “por lo cual los desplazamientos de refugiados pueden generar necesidades de subsistencia que concentran la deforestación., que a su vez llevaría a un declive en los servicios de los ecosistemas que finalmente intensificaría aún más los potenciales conflictos por recursos” (Machlis, G y Hanson, T, 2009, pág. 19).

Se tiene que uno de los factores que dañan los ecosistemas es la presencia de las minas antipersonales por parte del conflicto armado puesto que ocasionan graves daños “en el ecosistema y en la relación de los pobladores con el mismo, por lo que las dinámicas del conflicto armado deben considerarse en el proceso futuro de delimitación para entender la historia del territorio y las maneras de administrarlo” (Piedrahita, I y Peña, C, 2016, pág. 267).

Uno de los problemas que afecta a los ecosistemas debido al conflicto armado tiene que ver con los daños ocasionados a las petroleras los cuales son debido “según las autoridades, a retaliaciones ante la negativa de las empresas a pagarles ‘vacunas’ sino por su enorme peso en las

dos actividades que más están acabando selva y ríos en Colombia: el narcotráfico y la minería ilegal” (El Tiempo, 2015, pág. 1).

Es importante tener en cuenta que, “aunque parezca un hecho aislado, el medio ambiente y los conflictos armados están muy relacionados puesto que una guerra no solo engloba catástrofes humanas, sino que también produce daños en nuestro ecosistema” (Millana, 2016, pág. 1) es por lo cual que, “tras las guerras, los desastres ecológicos adquieren unas secuelas significativas. La población superviviente se encuentra con zonas de bosques y cursos de agua destruidos, aire contaminado, tierra envenenada, cultivos quemados, bosques talados o animales sacrificados” (Millana, 2016, pág. 1).

### **2.3.2. Causas y consecuencias del deterioro ambiental con relación al conflicto armado**

Entre las causas que generan el deterioro ambiental con respecto al conflicto armado se tienen las siguientes:

- **Atentados contra infraestructuras petroleras:** Se tiene que, a la fecha, “se han registrado 54 ataques contra los activos de ECOPETROL, de los cuales 14 han sido en Norte de Santander, 13 en Nariño, 6 en los departamentos de Arauca y Boyacá y 21 más en la zona de Putumayo y Huila” (El País, 2015, pág. 1); a raíz de estos atentados “las consecuencias medioambientales son de difícil cuantificación, ya que sus efectos continuarán vigentes durante años, incluso décadas” (Lastra, 2015, pág. 64).

Estos atentados traen diversas consecuencias como la “afectación de animales, en riesgo de desaparición como la danta, el armadillo, el manatí y el venado colablanca; además estos

ataques reducen recursos para inversión en educación, salud, servicios públicos y vías” (Ecopetrol, 2015, pág. 1)

- Cultivos ilícitos: Estos se expanden por el territorio nacional, se tiene que en el país “aumento en un 44%, pasando de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 en 2014, de tal manera que se presume que la producción paso de 290 a 442 toneladas métricas, es decir un 52% más con respecto a períodos anteriores” (Lastra, 2015, pág. 64); queda claro que “esta expansión y, la correspondiente degradación de bosques y selvas, se suma a la larga lista de consecuencias del conflicto armado en el entorno ambiental del país” (Lastra, 2015, pág. 64).

Una de las consecuencias de los cultivos ilícitos es que están devastando con una parte significativa de los bosques colombianos, lo que “implica un incremento de la contaminación de los suelos, del agua y del aire, poniendo en riesgo la diversidad biológica de hotspots<sup>1</sup> como el pacífico colombiano” (Lourdes, 2016, pág. 1).

- Minería ilegal: Se estima que el “28% del territorio nacional está sumido en actividades mineras de tipo ilegal, lo cual representa un grave problema de gobernabilidad y vigilancia estatal, sobre un sector que suele ser poco consecuente con las medidas de conservación y preservación del entorno ambiental” (Lastra, 2015, pág. 66).

Esta minería ilegal trae “consigo consecuencias que dañan los ecosistemas del país además se tiene que según un estudio de la Universidad Externado son más de 80 los ríos del país que están contaminados con mercurio” (Semana.com, 2017, pág. 1); también se encuentra que “más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación son deforestadas cada mes en Colombia por cuenta de la

---

<sup>1</sup> Los hotspot son regiones donde se concentran un mínimo de 1.500 especies de plantas.

explotación minera de oro a cielo abierto, que se está llevando a cabo en 17 de los 32 departamentos del país” (Redacción el Tiempo, 2016, pág. 1).

## **2.4. El acuerdo de paz y la protección al medio ambiente**

Es necesario señalar que la paz promete varios beneficios con relación al medio ambiente; pero a la vez, se presentan riesgos relacionados con los diferentes planes de desarrollo rural en las zonas de conflicto, por lo cual es pertinente resaltar que a medida que avancen los acuerdos es primordial que “las autoridades consideren los posibles impactos sobre el medio ambiente, en particular la Amazonía, la selva tropical con la mayor biodiversidad y uno de los más grandes reservorios de carbono del mundo, así como las regiones de la Orinoquia y el Pacífico” (Morales, 2017, pág. 2).

El acuerdo comprende una doble oportunidad, “por un lado, introducir criterios ambientales en la planeación y diseño del nuevo ordenamiento territorial y, por el otro, asegurar que el nuevo ordenamiento que trae la paz, que es también político, social y económico, incluya criterios ambientales” (Morales, 2017, pág. 5).

Cabe expresar que uno de los daños ambientales que a traído los conflictos armados es la deforestación por lo que se tiene que alrededor de 124.000 hectáreas de bosque, fueron afectados por este flagelo en Colombia durante el año 2015; teniendo en cuenta que “las principales causas, según el gobierno, fueron la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la tala ilegal y los incendios forestales. En muchos casos la tala ilegal está asociada a la conversión de bosque a pastizales para ganadería” (Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2016, pág. 5).

Lo anterior permite aclarar que:

Si la guerra está vinculada con la naturaleza, las posibilidades de una paz duradera también lo están. En otras palabras, si el conflicto giró parcialmente alrededor de los recursos naturales y el medio ambiente, la suerte del proceso de construcción de paz será moldeada por múltiples factores socioambientales: las políticas gubernamentales sobre la materia, los movimientos ambientalistas, el lugar y las modalidades de la explotación de los recursos naturales en el modelo económico del futuro, la fortaleza de los Estados nacional y local para implementar las leyes y políticas ambientales, la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el medio ambiente que los afectan, las presiones previsibles del cambio climático sobre poblaciones que tendrían que desplazarse forzosamente por nuevos eventos climáticos extremos y el ordenamiento territorial de las zonas biodiversas (como la Amazonia, el Chocó biogeográfico y el Catatumbo) que serían accesibles en adelante, entre muchos otros (Rodríguez, C; Rodríguez, D y Durán, H, 2017, pág. 12)

Así, se puede resaltar que los problemas ambientales en el país necesariamente tienen relación con el conflicto armado y que se necesitan de políticas públicas y desafíos para poder tener la posibilidad de contar con una paz duradera en Colombia; también es fundamental tener en cuenta que el medio ambiente en términos generales y, más concretamente, los recursos naturales, deben estar presentes como eje transversal de los diálogos de paz. “Esto, además, cobra particular relevancia en el contexto actual en donde factores como el calentamiento global pueden propiciar

la generación de nuevos conflictos, sin importar si el medio ambiente y los recursos naturales estuvieron ligados al conflicto o no” (Rodríguez, C; Rodríguez, D y Durán, H, 2017, pág. 39).

No obstante, para el éxito de la paz en Colombia es fundamental contar “con la recuperación y el mantenimiento de la riqueza ambiental del país, y un manejo adecuado del medio ambiente y un mal manejo, acompañado de un uso inadecuado e insostenible de los recursos naturales, también puede dar al traste con él” (Rodríguez, C; Rodríguez, D y Durán, H, 2017, pág. 41)

También hay que tener presente que es necesario contar con una política ambiental para la paz la cual debe contar con “aspectos concretos la búsqueda de la sostenibilidad sectorial y de la sostenibilidad regional en el contexto del aprovechamiento de los procesos de restauración del patrimonio natural para aumentar la cohesión social” (Carrizosa, 2011, pág. 4).

En este sentido para lograr la construcción de paz el medio ambiente se convierte en un factor primordial puesto que se logran llegar a diálogos con relación a “la protección de la naturaleza; la sostenibilidad o respeto a las generaciones futuras; el respeto a la infraestructura física de uso público; el respeto a los neutrales y la necesidad de fortalecimiento del factor humano” (Carrizosa, 2011, pág. 5).

Sin embargo, la paradoja ambiental del acuerdo de paz permite visualizar que los “territorios serán grandes protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de paz (desarrollo de infraestructura, apertura de mercados, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, etc.,)” (Hochschild, 2015, pág. 1).

Lo antes señalado es de gran importancia debido a que “el 50% del territorio continental del país está cubierto por bosques y otro tanto por importantes complejos de humedales y que los



mismos son de relevancia no solo para Colombia sino para la regulación del clima mundial” (Hochschild, 2015, pág. 1).

Asimismo, hay que tener en cuenta que para lograr una paz que contemple el medio ambiente se tiene que contar con el apoyo de las “16 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible las que tienen jurisdicción en los 125 municipios priorizados por Naciones Unidas para la implementación del acuerdo de paz; debido a que la mayoría tiene dificultades de gestión en términos de eficacia y eficiencia” (Naciones Unidas Colombia, 2014, pág. 9). Además, se tiene que 13 de esas 16 corporaciones tienen los presupuestos más bajos en comparación con las otras del país para inversión y funcionamiento; según el indicador de la contraloría, diez están por debajo de la línea de equidad de distribución de recursos vs distribución de responsabilidades; por tanto, resolver las anteriores problemáticas implicaría lo siguiente:

- Avanzar en procesos de ordenamiento territorial concertados en las áreas prioritarias para el posconflicto, en los cuales el ordenamiento ambiental es una pieza importante de un complejo rompecabezas.
- Fortalecer política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales para que puedan asumir los retos que conlleva la construcción de una paz que debe ser también sostenible, y revertir la tendencia de disminución de recursos asignados a las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Se hace necesario fortalecer en este sentido a nivel nacional al Ministerio, institutos de investigación, parques nacionales; a nivel regional a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible; y a nivel local a las secretarías de planeación y de ambiente de gobernaciones y alcaldías, corregimientos, juntas de acción comunal etc.

- Y promover modelos de desarrollo local sostenible y crecimiento verde que también se basen en el uso sostenible del inmenso capital natural de la nación.

(Naciones Unidas Colombia, 2014, pág. 9).

Como se puede observar si no se mejoran estas problemáticas es complicado lograr un acuerdo de paz con un ambiente sano, por lo cual se deben aprovechar las oportunidades que el medio ambiente ofrece mirando más a profundidad “lo rural más allá de lo agropecuario, redefinir las relaciones campo –ciudad y reconocer el rol de las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales, aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible” (Naciones Unidas Colombia, 2014, pág. 12).

Para esto es fundamental contar con un análisis del presupuesto ambiental para la paz contando con la capacidad institucional del Sistema Nacional Ambiental (SINA) “para abordar los retos en un escenario de posacuerdo depende, entre múltiples factores, de la disponibilidad de recursos financieros para invertir en el ordenamiento ambiental del territorio y en la promoción de un desarrollo local sostenible en las áreas de conflicto” (Naciones Unidas Colombia, 2014, pág. 15).

### **Capítulo 3.**

#### **3. Análisis del delito ambiental desde la perspectiva del conflicto armado**

##### **3.1. Una aproximación al artículo 331 del Código Penal – daños en los recursos naturales**

Con el fin de abordar el análisis normativo del artículo 331 del Código Penal, es necesario en primer lugar, definir su contenido:

El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales, o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de multa de ciento treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando:

- Se afecten ecosistemas naturales, calificados como estratégicos que hagan parte del Sistema Nacional, Regional y Local de las áreas especialmente protegidas;
- Cuando el daño sea consecuencia de la acción u omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia.

Teniendo claridad en los aspectos que integra el artículo 331 del Código Penal, se puede establecer que:

- El bien jurídico protegido es el *medio ambiente*. Para comprender el alcance de la afirmación realizada, es necesario establecer que el medio ambiente es “el medio circundante de la vida, a las características esenciales de la biosfera o esfera de la tierra donde habitan los seres vivos” (Mateo, 2003, pág. 21). También se ha reconocido como el sistema constituido por diversos “elementos, fenómenos y procesos naturales, sociales y culturales, que condicionan en un lugar y momento determinados la vida y el desarrollo de los organismos en interacción entre el hombre y los diferentes factores que integran el medio ambiente” (Ochoa, 2014, pág. 259).

Habiendo hecho claridad en lo que significa medio ambiente, a continuación, se hace referencia al derecho penal como aquel que protege la convivencia social, por medio de la tutela del orden social general, cuando se dan actuaciones contrarias a Derecho. Entonces, cuando se infringe el orden social se vulnera el bien jurídico tutelado, para el caso, el medio ambiente, estableciéndose que el acto delictivo que necesariamente trae implícito un daño u ofensa a un bien jurídico tutelado.

Entonces, García – Pablos (2012) citado por Ochoa (2014) ha establecido que el bien jurídico “es el bien vital, fundamental, para el individuo y para la comunidad que precisamente al ser tutelados por el derecho se convierten en “bienes jurídicos”” (pág. 274). Esto permite afirmar que el bien jurídico adquiere esta calidad, por gozar de protección jurídica, tal como se señala en el artículo 331 del Código Penal.

Entonces, el medio ambiente visto como el bien jurídico tutelado, integra el injusto material, a través del cual se pueden generar las condiciones fácticas y normativas en las que se concreta el daño a los recursos naturales, como los realizados por los grupos armados.

Siendo ejemplo claro de lo abordado, la explotación inescrupulosa de los recursos minerales o hidrocarburos, el cual afecta las fuentes hídricas, el suelo, el subsuelo y la atmosfera, entre otras. En este orden de ideas, el daño ocasionado al medio ambiente trae como consecuencias la afectación en la convivencia, generando problemas de salud pública, inseguridad, y modos delictivos que se dan como respuesta al temor que infunde esta clase de delitos a manos de los grupos armados.

Así, la legitimidad de la norma obedece en parte a factores políticos – económicos, que busca dotar de contenido al bien jurídico, bajo el entendido, que el medio ambiente resulta muy propicio para que de él se quieran adueñar no solamente los grupos armados, sino quienes integran los renglones económicos más fuertes en el país, sean del orden político, económico o social; de modo tal, que desde esta perspectiva se busca dotar de contenido al bien jurídico, configurando referentes que precisen su lesión en casos concretos y de esta forma limitar la aplicación desbordada del recurso penal, comprometiendo los principios de mínima intervención y subsidiariedad teniendo en cuenta que los bienes jurídicos colectivos pueden ser salvaguardados de forma autónoma, siempre y cuando se logré demostrar que se está frente a objetos concretos y determinados y cuya protección se debe originar, a partir de la norma penal tal como sucede con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la explotación del petróleo, entre otros.

Lo planteado hasta ahora, lleva a establecer que en el medio ambiente se protege son bienes colectivos que contribuyen al equilibrio ecológico del cual depende la humanidad para subsistir, aspecto que refleja la titularidad compartida del goce de los recursos naturales, la indisponibilidad del mismo para consentir su lesión o “puesta en peligro a pesar de haber un aprovechamiento individual de los recursos, la indivisibilidad del equilibrio natural y la naturaleza conflictual del

bien jurídico frente a intereses lícitos y socialmente necesarios de donde emanan las diversas fuentes de riesgo” (Rojas, 2014, pág. 21).

Situación que lleva a que la intervención del Estado sea recurrente en pro de proteger el medio ambiente, quien tiene la facultad de ponderar los bienes jurídicos de diversa índole que integran éste. En este sentido, es una equivocación confundir el bien jurídico tutelado con la materialidad física sobre la cual recaen las conductas punibles y en general, el objeto de regulación normativa tanto de la gestión de los recursos naturales como de los niveles permitidos de uso y degradación-; debido a que, a pesar que el equilibrio es dinámico y tiene una codependencia funcional entre los recursos; es decir, la afectación de uno repercute en el funcionamiento del otro; llevando a que el impacto ambiental sea verificado por medio del tipo penal en términos del daño causado que generalmente repercute en el equilibrio de todo el ecosistema

Frente a lo señalado, se tiene que hay quienes critican la delimitación genérica del “bien jurídico, al considerar que el margen de referencia es ineficaz para una concreción de la imputación penal respetuosa del principio de lesividad, proponiendo interpretaciones dirigida a los subsistemas y a partir de allí estructurar diversos tipos penales que protegen “ (Rojas, 2014, pág. 22)

### **3.2. Análisis**

La realidad del conflicto armado en el país y la incorporación de sus métodos de intimidación en el medio ambiente hace factible que existan en la realidad dos universos normativos. Por una parte, el ordenamiento jurídico tradicional, basado en preceptos constitucionales, acuerdos, tratados internacionales, gestión administrativa que junto con la normativa penal proponen las sanciones

y/o penas a través de las autoridades competentes y, otra muy diferente, la ley de intimidación impuesta por los grupos terroristas; en donde, la norma penal resulta débil y poco funcional frente a la problemática de la afectación del medio ambiente a manos de los grupos armados.

En este sentido, se debe tener en cuenta el doble enfoque que ha tenido el medio ambiente en el conflicto armado; de un lado, la escasez ambiental y la lucha por los recursos naturales renovables y no renovables como factores determinantes de la guerra interna que ha librado Colombia por más de 70 años; y, de otra parte, los efectos que deja el conflicto en el medio ambiente, en términos de impactos económicos y sociales.

Así, el primer enfoque está dirigido a comprender el tema desde la óptica de las relaciones de la sociedad con los ecosistemas y con sus recursos, lo que exige evidenciar ciertas circunstancias históricas que muestren la escasez de los recursos ambientales por las acciones bélicas, como por ejemplo las ocasionadas por la minería, deforestación, cultivos ilícitos, entre otros y las que se suscitan por la violencia con relación al monopolio de los recursos y la práctica en la extracción de éstos sin ningún tipo de control. Así, el análisis se centra en afirmar que el medio ambiente es un factor que pone en peligro la integridad territorial “del Estado, la paz y la estabilidad interna e internacional, el bienestar humano, los valores, la identidad, el modo de vida, así como el desarrollo económico y humano de un grupo, una sociedad, un Estado o, incluso, de los individuos” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 9). Significa que los ataques de los grupos terroristas aumentan si existe un déficit de recursos naturales; por tanto, este es considerado el pretexto o el origen de este. Los recursos aportados por la naturaleza como el agua, suelo, flora y fauna habrían dado lugar a la competencia y está generaría la violencia como medio para la consecución de aquellos y su aprovechamiento.

Los lineamientos básicos de este enfoque hacen ver a los ecosistemas y sus bienes como actores indirectos de la confrontación pues “la apropiación y uso de tales recursos generan interacciones sociales, de colaboración y de conflicto, cuyas características se relacionan, a su vez, con las de los ecosistemas mismos” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 9). Ahora bien, el medio ambiente físico propicia de alguna forma la confrontación entre grupos armados y las fuerzas públicas conformadas por el ejército y la policía. Es conocida la inmensa ventaja que los entornos naturales confieren a dichos grupos ilegales en el desarrollo y planificación del combate.

El ocultamiento, la difícil topografía, la distancia y la extensión de estos “son factores a favor de la insurgencia, pues permiten su preservación y sostenibilidad en la lucha, sorteando con gran éxito los ataques de las fuerzas oficiales y dando lugar a contraataques exitosos y rápidos” (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 9). Los territorios selváticos, extensos y lejanos hacen que los esfuerzos para acabar con la guerra sean inútiles, más cuando es precisamente esta particularidad lo que ofrece un escenario ideal para una guerra prolongada.

Situación que tiene estrecha relación con la geografía, como:

Elemento clave desde el punto de vista táctico y estratégico que juega en favor del conflicto y en contra del gobierno. Los grupos armados lo saben y aprovecha a fondo esa ventaja. Es más, podría decirse que el terreno pone prácticamente en condiciones de igualdad a las fuerzas insurgentes y a las fuerzas militares. Es un gran nivelador en el aspecto táctico y operacional. La insurgencia puede utilizar con la máxima eficacia sus precarios recursos, en tanto que el gobierno no puede usar eficientemente su abrumadora ventaja en recursos físicos y humanos (Londoño, H y Martínez, A, 2013, pág. 10).



Lo anterior contribuye a explicar unos de los papeles que juega el medio ambiente en la guerra interna del país.

En cuanto al segundo postulado, se encuentra que el medio ambiente es víctima del conflicto; debido a que, sufre de forma directa el deterioro de la explotación y el daño que emerge de la guerra, tal como se mostró en el capítulo precedente. En este orden de ideas, se puede afirmar la pérdida constante de deforestación, erosión de los suelos, destrucción de la fauna y la flora, deforestación; entre otras.

Un claro ejemplo de lo señalado es lo expuesto por El Espectador (2016) en la noticia judicial titulada *los 136 atentados contra el medio ambiente por parte del ELN*, siendo uno de los pocos casos; en donde, se menciona las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación a imponer cargos al comando central del grupo guerrillero por los atentados contra la infraestructura petrolera y energética.

Durante ocho años la guerrilla del ELN se ensañó contra las infraestructuras petroleras y energéticas del país, causando daños irreparables al medio ambiente y a las finanzas de la Nación. La mayoría de los atentados terroristas se registraron en contra del oleoducto Cañón Limón Coveñas, el cual atraviesa siete departamentos del país, causando así una crisis energética en el país, obligando además al Estado a destinar millones de dólares para su reparación (El Espectador, 2016, pág. 1).

En este periodo de tiempo la Fiscalía General documentó 136 casos, los cuales son base para hacer la *primera macroimputación contra los máximos comandantes de este grupo*

*guerrillero*, quienes deberán responder penalmente por ordenarlos ataques contra los oleoductos generando el derrame de 3.596.000 barriles de petróleo, causando así, una “afectación cercana a los 65 billones de pesos a las finanzas de la nación y 73 billones de pesos en el daño ambiental causado” (El Espectador, 2018).

Como punto final existe una clara necesidad de modificar el actual código penal, con miras a concretar el delito ambiental, a manos de los grupos terroristas; es decir, se debe cambiar el sujeto indeterminado por determinado.

## Conclusiones

El desarrollo de la presente investigación tuvo como fin demostrar que, a pesar de existir en el marco penal colombiano, el delito ambiental, éste no ha logrado ser consolidado con la rigurosidad requerida; toda vez, que de su deterioro depende que el territorio colombiano logre su sostenibilidad, aportando los elementos necesarios para la convivencia de las personas que lo integran.

Es así, como el medio ambiente ha sido otro de lo grandes damnificados por las acciones indiscriminadas de los grupos armados, quienes hacen uso de los recursos sin mediar reparo alguno; por el contrario, usufructúan el medio ambiente a su antojo, siendo latente la impunidad que existe en la materia.

Esto obedece en parte, a que el sistema penal colombiano, establece que el imputado debe ser *determinado*, circunstancia que le da a los grupos armados, el carácter de invisibilidad frente a las acciones que cometen; debido a que, determinar en manos de quien se hizo “una voladura de oleoductos”, quien lleva procesos de “minería ilegal” o quien es el dueño de los “cultivos ilícitos”, por citar algunos ejemplos, resulta ser una tarea compleja; generando con ello un vacío jurídico que no ha sido visibilizado con la magnitud requerida.

Por ello, lo establecido en el artículo 331 del Código Penal aunado a las normas ambientales, se quedan cortas frente a las acciones terroristas que comenten los grupos armados contra el ambiente; es por ello, que existe una clara necesidad de adecuar la norma penal, en pro de establecer un marco normativo que contenga la rigurosidad necesaria para sancionar esta clase de delitos en cabeza de los grupos armados y permitir de esta forma que la imputación se haga por grupo o frente, como una forma de validar acciones que en la mayoría han sido impunes.

Lo propuesto, no resulta descabellado, si se tiene en cuenta la particularidad que vive Colombia, frente a un conflicto que lleva más de 70 años y que es muestra clara de una débil institucionalidad, un marco penal permisivo y estructura normativa que no se ha cuestionado sobre la importancia del medio ambiente y la exigencia que en este momento esta haciendo por su recuperación.

## Referencias

- Abegón, M. (2013). La codificación de los efectos de los conflictos armados en los tratados: el proyecto de artículos de la comisión de derecho Internacional. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*(25), 1-33.
- Ander, E. (1995). *Diccionario del trabajo social*. Buenos Aires: Lumen.
- Andrade, G. (2002). *El impacto del conflicto armado sobre los ecosistemas y la biodiversidad*. Bogotá, D.C: Foro Nacional Ambiental.
- Arias, D. (5 de noviembre de 2012). *Conflicto armado y medioambiente*. Obtenido de [www.cronicadelquindio.com](http://www.cronicadelquindio.com): <http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-nota-54191.htm>
- Ávila, S. (2014). *Principios, derechos y pasivos ambientales: Un estudio de caso sobre contaminación por residuos peligrosos en Bogotá, D.C. .* (Tesis de grado). Colombia: Universidad Nacional de Colombia Maestría en Biociencias y Derecho.
- Bonilla, G. (1998). *Conflicto y justicia: Programa de Educación para la Democracia*. Bogotá, D.C : Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán.
- Bothe, M; Bruch, C; Diamond, J y Jensen, D. (2010). El derecho internacional y la protección del medio ambiente durante los conflictos armados: lagunas y oportunidades. *REVIEW INTERNATIONAL*(879), 321-346.
- Bulla, R. (2012). *Derecho Ambiental y Estatuto Sancionatorio*. Bogotá, D.C: Ediciones Nueva Juridica.
- Carrizosa, J. (2011). *Paz, medio ambiente y sostenibilidad*. Bogotá, D.C: Universidad Nacional de Colombia.

- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Colombia: DPS.
- Chica, A. (2007). *Posición y papel de la Unión Europea frente a la Ley de Justicia y Paz y frente al actual proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción de los niños pertenecientes a los grupos armados al margen de la ley*. Bogotá, D.C.: Universidad Javeriana.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014*. Colombia: CEPAL.
- Constitución Política. (1991).
- Contraloría General de la República. (2012). Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2011 - 2012. Colombia: CGR.
- Corte Constitucional Sentencia C - 449. (16 de julio de 2015). Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional sentencia C - 703. (6 de septiembre de 2010). Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá, D.C: Corte Constitucional.
- Corte Constitucional Sentencia C-320. (30 de junio de 1998). Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia C-595. (27 de julio de 2010). Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia C-632. (24 de agosto de 2011). Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional Sentencia C-703. (6 de septiembre de 2010). Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martinez. Bogotá, D.C.

Corte Constitucional Sentencia C-843. (27 de octubre de 1999). Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D.C.

Corte Constitucional Sentencia T - 080. (20 de febrero de 2015). Magistrado ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá D.C.

Corte Constitucional Sentencia T - 154. (21 de marzo de 2013). Magistrado ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Bogotá, D.C.

Corte Constitucional Sentencia T - 204. (1 de abril de 2014). Magistrado ponete: Alberto Rojas Ríos. Bogotá, D.C: Corte Constitucional.

Corte Constitucional Sentencia T-092. (19 de febrero de 1993). Magistrado Ponente: Simon Rodríguez Rodríguez. Bogotá, D.C.

Corte Constitucional Sentencia T-411. (17 de junio de 1992). Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, D.C.

Corte Constitucional Sentencia T-415. (17 de junio de 1992). Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón. Bogotá.

Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2017). *Opinión Consultiva OC-23/17 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA* . CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2018). *OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS*. San José de Costa Rica: CIDH.

Dávila, A. (2016). *Responsabilidad del Estado por el daño ambiental causado por la minería en Colombia*. (Tesis de grado). Bogotá, D.C: Universdiad Santo Tomás Maestría en Derecho Público.

De Rementeria, L. (2001). *La guerra de las drogas. Cultivos ilícitos y desarrollo alternativo*. Bogotá, D.C.: Planeta.

Decreto 2811. (18 de diciembre de 1974). Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.

Díaz, B. (2015). *La protección jurídico - penal del medio ambiente y el delito ambiental en Colombia*. (Tesis de grado). Bogotá, D.C: Universidad Santo Tomás - Facultad de Derecho.

Ecopetrol. (10 de junio de 2015). *Atentados contra infraestructura petrolera castigan a los colombianos más pobres y al medio ambiente*. Obtenido de [www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co):  
[https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/!ut/p/z0/04\\_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrfIzU6ySjE1TDC0tUnXTkgwSdU0SjVJ0k5IM03QtDEzNklMsDCyMUxL1C7IdFQG4GGWg/](https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrfIzU6ySjE1TDC0tUnXTkgwSdU0SjVJ0k5IM03QtDEzNklMsDCyMUxL1C7IdFQG4GGWg/)

Ecoportal. (13 de febrero de 2004). *Sobre la naturaleza jurídica de los delitos ambientales*. Obtenido de [www.ecoportal.net](http://www.ecoportal.net): [https://www.ecoportal.net/temas-especiales/contaminacion/sobre\\_la\\_naturaleza\\_juridica\\_de\\_los\\_delitos\\_ambientales/](https://www.ecoportal.net/temas-especiales/contaminacion/sobre_la_naturaleza_juridica_de_los_delitos_ambientales/)

El Espectador. (26 de agosto de 2016). *Los 136 atentados contra el medio ambiente por parte del ELN*. Obtenido de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-136-atentados-contraelmedioambientepartedel-el-articulo-651315>

El Espectador. (7 de febrero de 2018). *Corte IDH respalda a Colombia sobre protección del mar Caribe*. Obtenido de [www.elespectador.com](http://www.elespectador.com):  
<https://www.elespectador.com/noticias/nacional/corte-idh-respalda-colombia-sobre-proteccion-del-mar-caribe-articulo-737799>



El País. (2 de octubre de 2012). *Medio ambiente, otra víctima del conflicto armado en Colombia*.

Obtenido de [www.elpais.com.co](http://www.elpais.com.co/judicial/medio-ambiente-otra-victima-del-conflicto-armado-en-colombia.html): <http://www.elpais.com.co/judicial/medio-ambiente-otra-victima-del-conflicto-armado-en-colombia.html>

El País. (9 de julio de 2015). *Ya van 54 atentados a la infraestructura petrolera por parte de las*

*Farc*. Obtenido de [www.elpais.com.co](http://www.elpais.com.co/judicial/ya-van-54-atentados-a-la-infraestructura-petrolera-por-parte-de-las-farc-ecopetrol.html): <http://www.elpais.com.co/judicial/ya-van-54-atentados-a-la-infraestructura-petrolera-por-parte-de-las-farc-ecopetrol.html>

El Tiempo. (5 de julio de 2015). El dossier de los crímenes ecológicos de la guerrilla. *El Tiempo*.

Fajardo, D. (2014). *Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Fuquen, M. (enero-diciembre de 2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución.

*Revista bula rasa*(1), 265-278.

García - Pablos, D. (2012). *Introducción al Derecho Penal* (5 ed., Vol. 1). Madrid: Ramón Arece.

García, L. (Enero de 2007). *El principio de la reparación del daño ambiental en el derecho internacional público. Una aproximación a su recepción por parte del derecho mexicano*.

Obtenido de Anuario Mexicano de Derecho Internacional: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/rt/captureCite/207/347>

Giraldo, J. (2015). *Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos*. Bogotá, D.C.: Comisión Paz.

Grupo de Memoria Historica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: memorías de guerra y dignidad*.

Bogotá: Presidencia de la República.

- Hernández, S, Fernández, C y Baptista, L. (2010). *Metodología de la Investigación* (5 ed.).  
Cánada: McGraw Hill.
- Hochschild, F. (2014). *Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia*. EE.UU: Cooperación Alemana.
- Hochschild, F. (20 de enero de 2015). La paradoja ambiental del acuerdo de paz. *El espectador*,  
pág. 1.
- Hurtado, P. (2008). La responsabilidad penal de la empresa en el derecho penal Suizo. *Derecho Penal y Criminología*, 29(86 - 87), 95 - 115.
- Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2016). *Cifras de defoerstación anual 2015*. Colombia: IDEAM.
- Jares, X. (2002). *Educación y Conflicto*. Madrid: Ed. Popular.
- Kalivas, s. (2007). Civil war. *Oxford handbooks of political science*, 416-434.
- Lastra, R. (julio-diciembre de 2015). Degradación medioambiental como consecuencia del  
conflicto armado en Colombia. *LEGEM*, 3(1), 59-70.
- Lavaux, E. (2004). *Degradación ambiental y conflictos armados: las conexiones*. Bogotá, D.C.:  
Universidad del Rosario.
- Leiteritz, R; Nasi, C y Rettberg, A. (2009). Para desvincular los recursos naturales del conflicto  
armado en Colombia: Recomendaciones para formuladores de política y activistas.  
*Colombia Internacional*, 215-229.
- Ley 09. (24 de enero de 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Bogotá, D.C.: Congreso  
de Colombia.

Ley 1333. (21 de julio de 2009). por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial No.47417*. Bogotá, D.C: Congreso de la República.

Ley 1453. (24 de junio de 2011). Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.

Ley 23. (19 de diciembre de 1973). Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.

Ley 599. (24 de julio de 2000). Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.

Ley 600. (2000). *Código Penal*. Colombia: Congreso de la República.

Ley 99. (22 de diciembre de 1993). Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C.: Congreso de Colombia.

Londoño, H y Martínez, A. (2013). *El medio ambiente, otra víctima del conflicto armado colombiano actual*. Obtenido de <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2027/1/Trabajo%20de%20Grado%20Ledy%20Johana%20Martinez%20y%20Maria%20Consuelo%20Londo%C3%B1o%20Holguin.pdf>

Los Recursos Humanos. (24 de abril de 2015). *¿Qué es el conflicto?* Obtenido de [www.losrecursoshumanos.com](http://www.losrecursoshumanos.com): <http://www.losrecursoshumanos.com/que-es-el-conflicto/>

Lourdes, M. (19 de agosto de 2016). *Bosques en Colombia: víctimas de los cultivos ilícitos de coca*. Obtenido de [sostenibilidad.semana.com](http://sostenibilidad.semana.com): <http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/bosques-en-colombia-victimas-de-los-cultivos-ilicitos-de-coca/35877>

Machlis, G y Hanson, T. (2009). Sobre la ecología de los conflictos armados. *Papeles*(105).

Macías, J. (10 de mayo de 2015). *El medio ambiente: Otra víctima silenciosa del conflicto*.

Obtenido de <http://www.elcolombiano.com/colombia/el-medio-ambiente-otra-victima-silenciosa-del-conflicto-GX1189844>

Martinez, D. (2002). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: consecuencias accesorias contra la empresa. *Derecho Penal Contemporáneo*, 1-9.

Martínez, R. (2013). *Los delitos ambientales. Un reto para la tipificación de conductas en el Derecho Penal Colombiano*. Bogotá, D.C: Grupo Editorial Ibañez.

Mateo, M. (2003). *Manual de Derecho Ambiental* (3 ed.). Navarra: Thomson - Aranza.

McSweeney, K. (2014). *El impacto de las políticas de drogas en el medio ambiente*. Colombia: ONU.

Meza, A. (2011). *Los efectos de los conflictos armados en los tratados, y la distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos armados sin carácter internacional*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Millana, L. (5 de noviembre de 2016). *El medio ambiente, la víctima olvidada en los conflictos armados*. Obtenido de [www.concienciaeco.com](http://www.concienciaeco.com): <https://www.concienciaeco.com/2016/11/05/medio-ambiente-la-victima-olvidada-los-conflictos-armados/>

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. (2009). *Resolución 0170*. Colombia: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Ministerio del Medio Ambiente. (15 de noviembre de 2017). *Misión*. Obtenido de [www.minambiente.gov.co](http://www.minambiente.gov.co): <http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/mision-y-vision>

- Montaño, E. (24 de agosto de 2015). *¿Qué tiene que hacer Colombia para que el fin del conflicto no se traduzca en la destrucción de su riqueza natural?* Obtenido de sostenibilidad.semana.com: <http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/postconflicto-medioambiente-paz-ambiental/33706>
- Morales, L. (2017). *La paz y la protección ambiental en Colombia: Propuesta para un desarrollo rural sostenible*. Colombia: El Diálogo.
- Naciones Unidas Colombia. (2014). *Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia*. Colombia: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD).
- Ochoa, F. (2014). Medioambiente como bien jurídico protegido, ¿visión antropocéntrica o ecocéntrica? *Derecho penal y criminología*, 3(11), 253 - 294.
- Organización de Naciones Unidas [ONU]. (1992). *Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo*. Rio de Janeiro: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (1972). *Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente*. Estocolmo: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2002). *Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible*. Johannesburgo: ONU.
- Pastrana, E. (2006). La Unión Europea frente a la Ley de Justicia y Paz y la desmovilización de las AUC: entre las dudas y el pragmatismo. *Policy Paper*(25).
- Piedrahita, I y Peña, C. (2016). Disputas y conflictos en torno a la delimitación de los complejos de páramos en Colombia. *AGO. USB*, 15(2), 257-275.

- Psicoactiva. (2017). *Los conflictos: tipos, causas y alternativas de solución*. Obtenido de [www.psicoactiva.com: https://www.psicoactiva.com/blog/los-conflictos-tipos-causas-alternativas-solucion/#Tipos\\_de\\_conflicto](https://www.psicoactiva.com/blog/los-conflictos-tipos-causas-alternativas-solucion/#Tipos_de_conflicto)
- Ramírez, M. (10 de febrero de 2017). *Algunos delitos ambientales tipificados en la legislación Colombiana*. Obtenido de [www.colombialelegalcorp.com: http://www.colombialelegalcorp.com/delitos-ambientales-en-legislacion-colombiana/](http://www.colombialelegalcorp.com/delitos-ambientales-en-legislacion-colombiana/)
- Redacción el Tiempo. (28 de junio de 2016). *Minería ilegal arrasa con más bosques que la coca*. Obtenido de [www.eltiempo.com: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16632468](http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16632468)
- Resolución 3438. (29 de diciembre de 2011). Por la cual se crea y reglamenta la estructura y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como su sede de operación. Bogotá, D.C.: Fiscalía General de la Nación.
- Restrepo, J y Aponte, D. (2009). *Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones*. Bogotá, D.C.: Universidad Javeriana.
- Restrepo, J y Aponte, D. (2009). *Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones*. Bogotá, D.C.: Universidad Javeriana.
- Restrepo, J y Aponte, D. (2009). *Guerra y violencias en Colombia: Herramientas e interpretaciones*. Bogota, D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.
- Rivera, O. (eneo de 2017). Breve estudio descriptivo del fenómeno ambiental en sus dos dimensiones: daño ambiental y daño ecológico. *Derecho y políticas públicas*, 19(25), 83 - 103.

- Rodríguez, C; Rodríguez, D y Durán, H. (2017). *La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo*. Bogotá, D.C: Dejusticia.
- Rodríguez, G y Vargas, Ch. (2015). *Perspectivas de responsabilidad por daños ambientales en Colombia*. Bogotá, D.C: Colección textos de jurisprudencia.
- Rodríguez, M. (2003). *Los cultivos ilícitos y el medio ambiente*. Bogotá, D.C.: Museo Nacional de Colombia.
- Rojas, E. (2014). *Análisis político criminal y dogmático del delito de daños en los recursos naturales en Colombia (Art. 331 del CP)*. Obtenido de [https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2969/Laura\\_RojasEscobar\\_2014.pdf?sequence=1](https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2969/Laura_RojasEscobar_2014.pdf?sequence=1)
- Ruiz, J. (29 de noviembre de 2014). *Estructuras del conflicto características y elementos*. Obtenido de prezi.com: <https://prezi.com/tfoszx8csmbh/estructura-del-conflicto-caracteristicas-y-elementos/>
- Ruíz, L. (2007). Protección penal del medio ambiente. Estado de la cuestión y acción civil dentro del proceso penal. En Ó. Amaya, *Daño ambiental* (Vol. I, págs. 89 - 123). Bogotá, D.C: Universidad Externado de Colombia.
- Sáenz, R. (1996). La prehistoria del narcotráfico en Colombia. *INNOVAR*(8).
- Sánchez, F y Chacón, M. (2005). *Conflicto, estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002*. Bogotá, D.C.: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE).
- Sarmiento, J. (2016). *Los efectos del conflicto armado colombiano en el Caribe, en números*. Barranquilla: Universidad del Norte.

- Schünemann, B. (1979). *Unternehmenskriminalität und Strafrecht. Eine Untersuchung der verantwortlichheit der Unternehmen und ihre Führungskräfte nach geltendem und geplanten Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht*. Brln: Bonn.
- Semana.com. (23 de marzo de 2017). *Las terribles consecuencias de la minería ilegal en los ríos colombianos*. Obtenido de sostenibilidad.semana.com:  
<http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/atrato-y-miles-de-peces-muertos-por-la-mineria-ilegal/37383>
- Significados. (15 de enero de 2018). *Qué es un conflicto*. Obtenido de [www.significados.com](http://www.significados.com):  
<https://www.significados.com/conflicto/>
- Silva, G. (julio-diciembre de 2008). La teoría del conflicto. *Prolegómenos Derechos y Valores*, 11(22), 29-43.
- Suares, M. (1996). *Mediación: conducción de disputas, comunicación y técnicas*. Buenos Aires: Paidós.
- Useche, A. (2015). *Estrategias para minimizar la degradación ambiental por producción de cultivos ilícitos en periodo de posconflicto en el Departamento de Nariño*. Bogotá, D.C.: Universidad Militar Nueva Granada.
- VICE. (2 de julio de 2015). *Las cinco deudas del conflicto con el medio ambiente*. Obtenido de [www.vice.com](http://www.vice.com):  
[https://www.vice.com/es\\_co/article/vdakj9/las-cinco-deudas-del-conflicto-con-el-medio-ambiente](https://www.vice.com/es_co/article/vdakj9/las-cinco-deudas-del-conflicto-con-el-medio-ambiente)
- Wilches, G. (22 de septiembre de 2012). *Supongamos la paz con la naturaleza*. Obtenido de [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com): <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12245564>
- Yaffe, L. (julio-diciembre de 2011). Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta. *SCIELO*(8), 187-208.



